

HILDEBRANDT

en sus trece ***

PRIMICIA



Nuevas cuentas sucias de Keiko Fujimori

► La fiscal Manuela Villar Ramírez ha registrado en 186 páginas la investigación que demuestra el fraude contable perpetrado por Fuerza Popular el 2021, el ingreso de dinero de origen desconocido en sus cuentas, la simulación de aportes y el uso de fondos públicos para la campaña electoral. ¡Madame K necesitará otra manita del TC!

(4, 5 y 30)

Revistas.PeruRadio.net.pe

Punto para la mafia

► *Tomás Aladino Gálvez, el Fiscal de la Nación que destituye a quienes lo investigan, seguirá contaminando el Ministerio Público. Un error garrafal del juez Torres Tasso le facilitó la permanencia. También lo ayudó la debilidad postrera de Delia Espinoza*

AMÉRICO ZAMBRANO

Antes de que venciera el plazo impuesto por el Poder Judicial, Tomás Aladino Gálvez ya había tomado precauciones: ordenó que parte del personal del noveno piso del Ministerio Público trabajara de forma remota hasta el lunes y pidió las llaves de cada oficina, incluida la de Delia Espinoza, según fuentes de la Fiscalía. “Nadie entra sin autorización”, dijo un funcionario bajo reserva.

La orden del juez Juan Fidel Torres Tasso, del 9° Juzgado Constitucional de Lima, había sido clara: en un máximo de 48 horas la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debía restituir a Espinoza como Fiscal de la Nación. Pero el jueves, cuando el plazo se cumplió, Gálvez seguía al mando.

La JNJ, por su parte, optó por la demora. Alegó que la resolución judicial “requería una aclaración” y que el proceso disciplinario contra Espinoza seguía en trámite. En la práctica, decidió no ejecutar el fallo: reprogramó diligencias y volvió a citar a la Fiscalía a declarar el lunes 17, como si nada hubiera ocurrido.

Mientras tanto, al cierre de esta edición, Gálvez se aferraba al puesto. “Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así”, dijo en Canal N en respuesta a una carta que le envió Espinoza, donde le pide que le devuelva formalmente el cargo de Fiscal

de la Nación.

Para la defensa de Espinoza ese argumento no tiene sustento. “La reposición es automática. Cuando se suspende la resolución que la apartó, ella vuelve a ser Fiscal de la Nación por derecho propio. No hay nada que esperar”, señala su entorno.

En el Ministerio Público se ha instalado una crisis de mando: una fiscal repuesta que no pudo –y no quiso– ingresar en el momento oportuno, y un interino que no quiere salir.

El problema tiene un origen: el juez Juan Torres Tasso quiso devolver el orden a la Fiscalía, pero su fallo terminó profundizando el caos.

En la resolución del 10 de noviembre declaró fundada la medida cautelar de Delia Espinoza, suspendió la decisión con la que la JNJ la había separado y reconoció la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la designó Fiscal de la Nación en noviembre de 2024. Incluso subrayó que la JNJ no tiene competencia constitucional para nombrar o destituir al titular del Ministerio Público.

Hasta ahí el razonamiento era consistente. Pero en el punto siguiente el propio juez dio un paso en falso: ordenó que esa misma JNJ –la que acababa de declarar incompetente– “cumpla con reponer” a la doctora Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación dentro del plazo de dos días.

Esa línea convirtió la resolución en un callejón sin salida.

Fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez: ordenó detener a Delia Espinoza si se atrevía a irrumpir en el Ministerio Público el jueves 13.



“Es una contradicción”, explica a este semanario Luciano López, abogado de Espinoza. “Ahora la JNJ cuenta con un argumento para decirle al juez: ‘Oiga, si usted ha dado una medida cautelar diciendo que no tenemos competencia para designar o restituir a una Fiscal de la Nación, ¿cómo nos pide ahora que la repongamos?’ Eso va a retrasar todo”, asegura.

El martes 11 López presentó un documento ante el juzgado para pedir una aclaración. En el escrito, al que esta revista tuvo acceso, el abogado solicita tres precisiones centrales. Primero, que se elimine el punto de la resolución que ordena a la JNJ emitir un pronunciamiento,

porque, al suspenderse la medida que la apartó, Espinoza recupera automáticamente el cargo. Segundo, que se corrija el término “sanción impuesta”, ya que lo que la JNJ dictó fue una medida cautelar, no un castigo. Y tercero, que se aclare que la suspensión del proceso disciplinario incluye todas las resoluciones derivadas de ese expediente. Hasta ahora, el juez Juan Torres Tasso no ha respondido.

Según fuentes con conocimiento directo de los hechos, el mismo Luciano López conversó con el magistrado para exponerle el error y este respondió, fastidiado, que su resolución estaba clara.

“No sé si es torpeza o cálculo –dice un magistrado del

PJ–. Pero un juez de experiencia como Torres Tasso no comete un error así. Es como si hubiera soltado el freno y pisado el acelerador al mismo tiempo”.

Mientras el juez guarda silencio, Gálvez y la JNJ desafían abiertamente el mandato judicial y prolongan el bloqueo institucional. El actual Fiscal de la Nación sostiene que no entregará el cargo hasta recibir una resolución formal de la Junta, mientras en ese organismo aseguran que no pueden emitir ningún documento a favor de Espinoza porque carecen de facultades para hacerlo. “Yo te aseguro lo que van a decir”, adelanta una fuente cercana a la Junta. “Que no pueden reponerla

Un nuevo mal paso de la fiscal Delia Espinoza. Anunció que tomaría posesión en el cargo de Fiscal de la Nación. Luego se arrepintió.

hacer valer la ley”, dijo una fuente fiscal el jueves por la tarde. “Al decidir esperar, ha validado a quienes buscan impedir su regreso”, añadió.

Su decisión, en los hechos, refuerza el *statu quo*: la JNJ gana tiempo, Gálvez mantiene su autoridad y sus propios aliados comienzan a cuestionar su lectura de poder.

El efecto político es inmediato: su repliegue fortalece a las fuerzas que desde el Congreso buscan consolidar el control sobre la Fiscalía. Para esas bancadas la permanencia de Tomás Gálvez en el cargo es parte del equilibrio que garantiza la impunidad, según especialistas consultados.

Su gestión interina ha resultado funcional a un grupo de partidos —Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso, entre otros— que buscan deshacerse de los fiscales incómodos y contener los casos que rozan a sus dirigentes.

Desde que asumió el cargo, Gálvez ha intervenido directamente en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la investigación que desnudó la trama de favores y nombramientos entre jueces, fiscales, políticos y abogados.

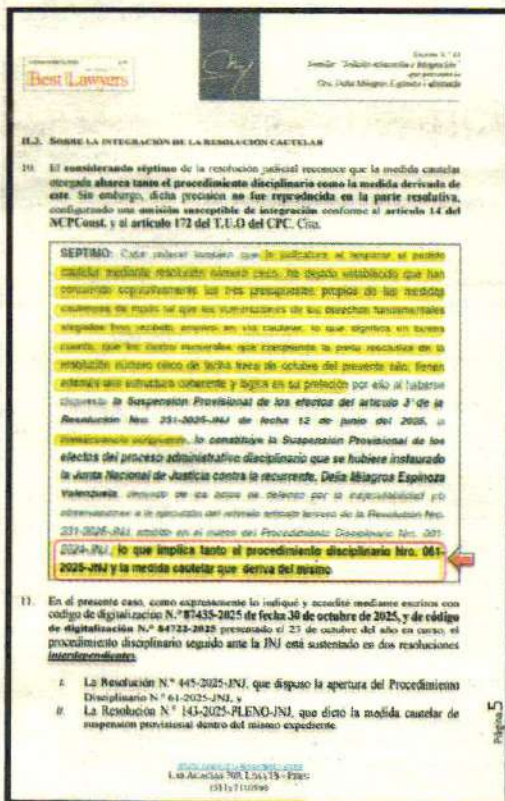
Hace dos semanas firmó la resolución 3343-2025-MP-FN, con la que removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien lo investigaba por presunto cohecho.

El argumento formal fue una supuesta filtración de información procesal. En realidad, Delgado había solicitado datos sobre una carpeta fiscal vinculada a José Luis Castillo Alva, abogado y amigo de Gálvez, también vinculado al caso.

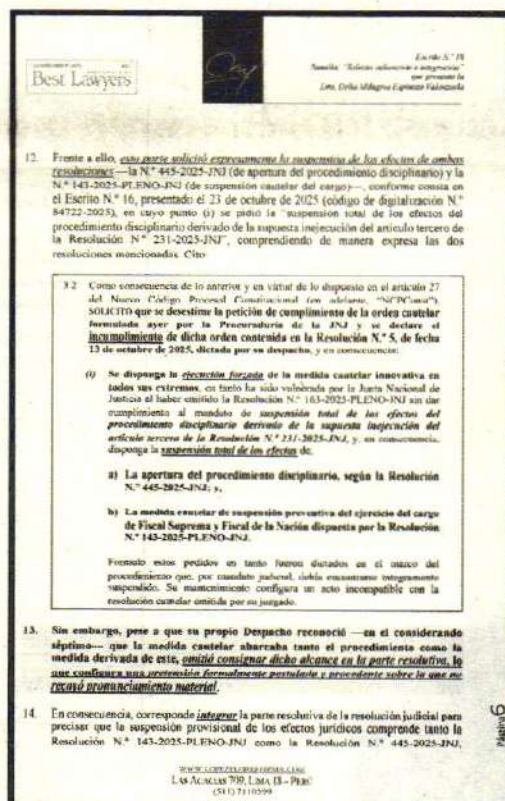
“El señor Fiscal de la Nación no solo ocupa el rol de investigado en el procedimiento que motivó mi actuación, sino que además interviene en la decisión de mi remoción. Tal circunstancia plantea un conflicto de intereses claro y manifiesto, pues la misma persona que podría verse afectada por las investigaciones es quien propicia o aprueba el cese del fiscal a cargo de las mismas”, advirtió la fiscal Delgado en un oficio dirigido a la Junta de Fiscales Supremos.

Su ofensiva no terminó ahí. Días después Gálvez destituyó

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30



Dos de las ocho páginas del pedido de “aclaración” que la defensa de Delia Espinoza envió al juez Juan Torres Tasso el martes 11.



porque el mismo juez les quitó esa competencia”, indicó.

El resultado es un fallo judicial, por ahora, imposible de ejecutar. Para agravar el cuadro, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ sigue activa. El 11 de noviembre notificó una nueva citación a Espinoza, pese a que el punto primero de la resolución judicial ordena suspender cualquier actuación

en ese expediente. “Eso es desacato puro. No pueden seguir actuando como si el fallo no existiera”, aseguran fuentes cercanas a Delia Espinoza.

A ese desacato institucional se sumó, en las últimas horas, una marcha atrás de la propia Espinoza. Ella había anunciado que este jueves 13 se presentaría en la sede de la Fiscalía de la Nación para hacer cumplir la orden judicial

y desplazar a Tomás Gálvez. Pero cambió de opinión poco después.

Sus allegados informaron a los medios que Espinoza no se presentaría “por respeto a la institución”. La Fiscal que había obtenido una victoria judicial eligió así no cruzar la puerta del viejo edificio de la avenida Abancay donde debía volver a ejercer el mando.

El anuncio de Espinoza fue



Juez Juan Fidel Torres Tasso: un error de concepto hizo virtualmente inejecutable su orden de reponer a Espinoza.

recibido en la Junta Nacional de Justicia como un respiro. En el entorno de Tomás Gálvez, en cambio, se interpretó como una señal de debilidad. “Hoy era su oportunidad de

Nuevas cuentas sucias de Keiko Fujimori

► La fiscal Manuela Villar Ramírez ha registrado en 186 páginas la investigación que demuestra el fraude contable perpetrado por Fuerza Popular el 2021, el ingreso de dinero de origen desconocido en sus cuentas, la simulación de aportes y el uso de fondos públicos para la campaña electoral. ¡Madame K necesitará otra manita del TC!



Manuela Villar Ramírez: la impecable fiscal que investiga las cuentas del 2021 de Fuerza Popular. Ha encontrado falsos aportantes y millones de soles ilícitos.

ELOY MARCHÁN

Desde su etapa de universitaria, la vida de Keiko Fujimori está marcada por sobres manila. A punto de sacarse de encima el caso "Cocteles", la hija de don Alberto tiene

otra investigación por el mismo motivo: recibir dinero de procedencia "desconocida" para luego blanquearlo. Así lo revela un documento elaborado por la fiscal Manuela Villar Ramírez y que presentamos en calidad de primicia.

La heredera de Alberto

Fujimori vuelve a estar en serios problemas. Y esta vez no podrá alegar que el fiscal José Domingo Pérez la persigue. El expediente está en el despacho de la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, a cargo de Villar, una fiscal de larga e intachable trayectoria.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

PRIMERA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS - SEGUNDO DESPACHO FISCAL DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

DISPOSICIÓN FISCAL DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

CARPETA FISCAL N° 01-2024-PSCEE-MP-FN

FISCAL RESPONSABLE: DRA. MANUELA ROSANA VILLAR RAMÍREZ
Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Segundo Despacho

En su condición de presuntos COAUTORES con el agravante de ser presuntos integrantes de una "Organización Criminal" seguidos por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS en agravio del Estado peruano, representada por el Procurador Público de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio del Interior:

PERSONAS NATURALES		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. NAC. DE IDENTIDAD
1	Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI	10001088
2	Miguel Ángel TORRES MORALES	40433187
3	Luis Fernando GALARRETA VELARDE	09537000
4	Karina Julliza BETETA RUBIN	22509175
5	Milagros TAKAYAMA JIMENEZ	16787889
6	Lindam MIRANDA ZAMALLOA	06803677

PERSONAS JURÍDICAS	
N° EMPRESAS Y/O COMPAÑÍAS	RUC/PAIS
1 PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR	20535603261 / Perú

DISPOSICIÓN FISCAL S/N

Lima, 30 de septiembre de 2025

1. DADO CUENTA

1.1. Con la presente Carpeta fiscal, cuya investigación preliminar se dispuso con fecha 05/07/2021 mediante Disposición Fiscal N° 01 y por Disposición Fiscal Superior N° 01-2024-PSCEE-MP-FN de fecha 29/08/24 se dispuso remitir a la Fiscalía de turno de este subsistema¹ para cuyos efectos mediante disposición fiscal de no formalización ni continuación de la investigación preparatoria que dispuso el archivo del mismo de fecha 24/02/25; asimismo, con la Disposición Superior N. 16-2025-1-PSNEDLA-MP-FN de fecha 08/07/25 que dispuso entre

¹ Véase O.G. 14169-14174 (Tomo 71)
² Véase O.G. 18134-18135

MANUELA ROSANA VILLAR RAMÍREZ
Fiscal Provincial Titular
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Segundo Despacho

Página 1 de 186

Página 1 del informe de la fiscal Manuela Villar donde decide pasar a investigación preparatoria el caso contra Keiko Fujimori por la campaña del 2021.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

PRIMERA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS - SEGUNDO DESPACHO FISCAL DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

a. Aportantes que niegan haber realizado contribuciones

De acuerdo con las diligencias fiscales (tomo 70, fs. 13976-13979), se identificó un grupo de nueve personas cuyos nombres fueron incluidos como aportantes en especie por un total de S/ 38,500.00, pero que negaron haber efectuado dichas entregas:

N°	FECHA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1	09/06/2021	Fabola Marchal	S/ 11,000.00	Tasa con código 1139
2	11/06/2021	Kathelin Johanna Torres Montalván	S/ 5,500.00	Tasa con código 1139
3	11/06/2021	Omair Efraín Moreyra Moreyra	S/ 3,300.00	Tasa con código 1139
4	11/06/2021	Roberto Alarcón Gómez	S/ 1,100.00	Tasa con código 1139
5	11/06/2021	Cesar Fausto Tabaja Arévalo	S/ 1,100.00	Tasa con código 1139
6	11/06/2021	Aparicio Almeida Vega	S/ 1,100.00	Tasa con código 1139
7	11/06/2021	Fredy Rojas Chumbe	S/ 1,100.00	Tasa con código 1139
8	15/06/2021	Stephan Reusche Cnari	S/ 3,200.00	Tasa con código 1139
9	16/07/2021	Xorge Abel Gastelu Carbajal	S/ 1,100.00	Tasa con código 1139
		Total	S/ 38,500.00	

b. Aportantes sin capacidad económica o no identificados plenamente:

Del análisis de los registros financieros presentados por el partido político Fuerza Popular durante la campaña electoral 2021, se ha identificado un conjunto de aportes en efectivo que ascienden a un total de S/ 27,350.00 soles, atribuidos principalmente a los ciudadanos Alejandro Saldamiga León y Edwin Tuesta Vázquez, quienes figuran como contribuyentes reiterativos en el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2021.

MANUELA ROSANA VILLAR RAMÍREZ
Fiscal Provincial Titular
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos - Segundo Despacho

Página 40 de 186

Página 40 con la lista de nueve personas que negaron haber aportado dinero a la campaña del 2021 de Madame K.

Villar investiga a Fujimori por "financiamiento ilegal de partidos políticos", delito tipificado en el código penal desde el 2017 y que se castiga con penas de hasta ocho

años de cárcel efectiva. El último 30 de septiembre Villar decidió pasar el caso a investigación preparatoria y sustentó sus razones en un informe de 186



Keiko Fujimori: el objetivo de su partido era precisamente carecer de contabilidad formal.



Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres: ambos están en el expediente por haber sido autoridades de la organización el 2021.

páginas en el que se acumulan decenas de testimonios y documentación contable, administrativa y bancaria. Fuentes de su despacho señalan que "la investigación es muy sólida" y el objetivo es presentar la acusación contra Fujimori dentro de seis meses.

A diferencia del caso "Cocteles", donde hubo 39 investigados, Villar ha puesto la puntería en sólo seis personas. Los principales imputados son Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, todos integrantes de la plancha presidencial de Fuerza Popular para el 2026.

Las otras involucradas son Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda Zamalloa. Beteta y Takayama aspiran a una curul en la Cámara de Diputados. Están incursas en la investigación porque fungieron de tesoreras de Fuerza Popular. Lindman Miranda está incluida por

ser la contadora.

"La organización criminal liderada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, que participó en las elecciones presidenciales en el 2021, permitió que ingrese al dominio patrimonial de Fuerza Popular dinero de origen desconocido -bajo aportes anónimos, aportantes falsos u otros modelos- y habría permitido que se ejecute dinero de fondos públicos para fines distintos a los fijados por ley", argumenta la fiscal Villar en el documento.

El expediente fiscal tiene dos partes. En una se desgana cómo Fuerza Popular manejó irregularmente el dinero que entró para la campaña presidencial 2021 de Fujimori. Y el otro bloque se centra en el financiamiento de la "campaña fraudista" cuyo único objetivo era desconocer la victoria de Pedro Castillo e impedir que jurara el cargo el 28 de julio. Fujimori fra-

casó, pero el trajín de sobres con plata al margen de la ley dejó rastro y la fiscal Villar lo ha desentrañado.

"Se atribuye a Keiko Fujimori haber tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron por decisión suya o bajo su dirección, para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero (...). Habría utilizado la estructura del partido político Fuerza Popular para canalizar los fondos y darles apariencia de licitud, impidiendo así su detección por parte de las autoridades", explica la fiscal Villar en su escrito.

El documento fiscal recoge otros dos hallazgos que apuntan al carácter reincidente de Fujimori en asuntos pecuniarios. Ha encontrado Villar que Fuerza Popular utilizó S/ 1.6 millones del dinero que recibió de la ONPE para la campaña

electoral de Fujimori. Eso está prohibido. El dinero público es para fortalecer los partidos, no para pagar la carrera electoral de sus líderes.

Y ha encontrado Villar que el fujimorismo recaudó S/ 1'258,708 entre el 9 y 30 de julio, es decir, cuando la campaña electoral había terminado y la ley prohibía expresamente recibir aportes. Ese dinero se usó para la campaña fraudista y para pagar las tasas del JNE con el fin de intentar anular los resultados de 1,384 mesas electorales.

La fiscal también les ha puesto rostro a los mecenas de la pataleta de Keiko Fujimori tras perder por tercera vez las elecciones.

Los que más se rasaron el bolsillo fueron David Chlimper Ackerman, hermano del exministro de Agricultura de Alberto Fujimori, con S/ 96,000, y los empresarios Erick Valle Saavedra (S/ 84,000), Ger-

mán Kruger Peschiera (S/ 60,500), Jesús Achuy León (S/ 60,500) y Paola Man Higuichi (S/ 51,700).

El equipo de la fiscal Villar ha recogido el testimonio de nueve personas que niegan categóricamente haber aportado un céntimo a la campaña fraudista. En esa lista de presuntos aportantes fantasmas están, por ejemplo, Fabiola Menchor, que negó los S/ 11,000 que el fujimorismo anotó en el reporte a la ONPE. Lo mismo dijeron Katherin Torres Montalván (negó S/ 5,500), Omar Moreyra Moreyra (negó S/ 3,300) y Stephan Reusche Ciriani (negó S/ 3,200).

El Ministerio Público también detectó que las finanzas personales de dos presuntos mecenas de aquella campaña no encajan con el monto de las donaciones.

Ese es el caso de Alejandro Saldarriaga León, quien supuestamente aportó S/ 18,350 aun cuando su sueldo es de S/ 4,000 como chofer de transporte de carga. Y el caso de Edwin Tuesta, a quien le anotaron un aporte de S/ 9,000, pese a tener una remuneración mensual de S/ 2,000.

En el 2021, con la investigación del caso "Cocteles" pisándole los talones, en Fuerza Popular seguían recibiendo dinero en sobres manila. Así lo reconocieron a la fiscal Villar nueve aportantes.

"Franco Montiel Ibarguren, quien declaró haber entregado personalmente un sobre amarillo con dinero en el local de Fuerza Popular, como parte del apoyo para cubrir gastos de campaña", se lee en el escrito de la fiscal Villar. Montiel entregó S/ 42,900 en efectivo.

"Álvaro Guillermo Estrada Briceño reconoció haber entregado S/ 30,000 en efectivo, que posteriormente fue reportado como 'aporte en especies', pese a que no correspondía a una donación no dineraria", dice otra parte del escrito de Villar.

Los empresarios Iván Katerkaru Gushiken y Rubén Awa Matsukawa contaron al Ministerio Público que le dieron dinero en sobres manila a Milagros Takayama

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Flores de azar

► Seis millones de jugadores, 102 propuestas digitales (27 peruanas, 75 extranjeras), impuestos escasos que ni siquiera se pagan, 11,993 diagnósticos formales de ludopatía. Así estamos

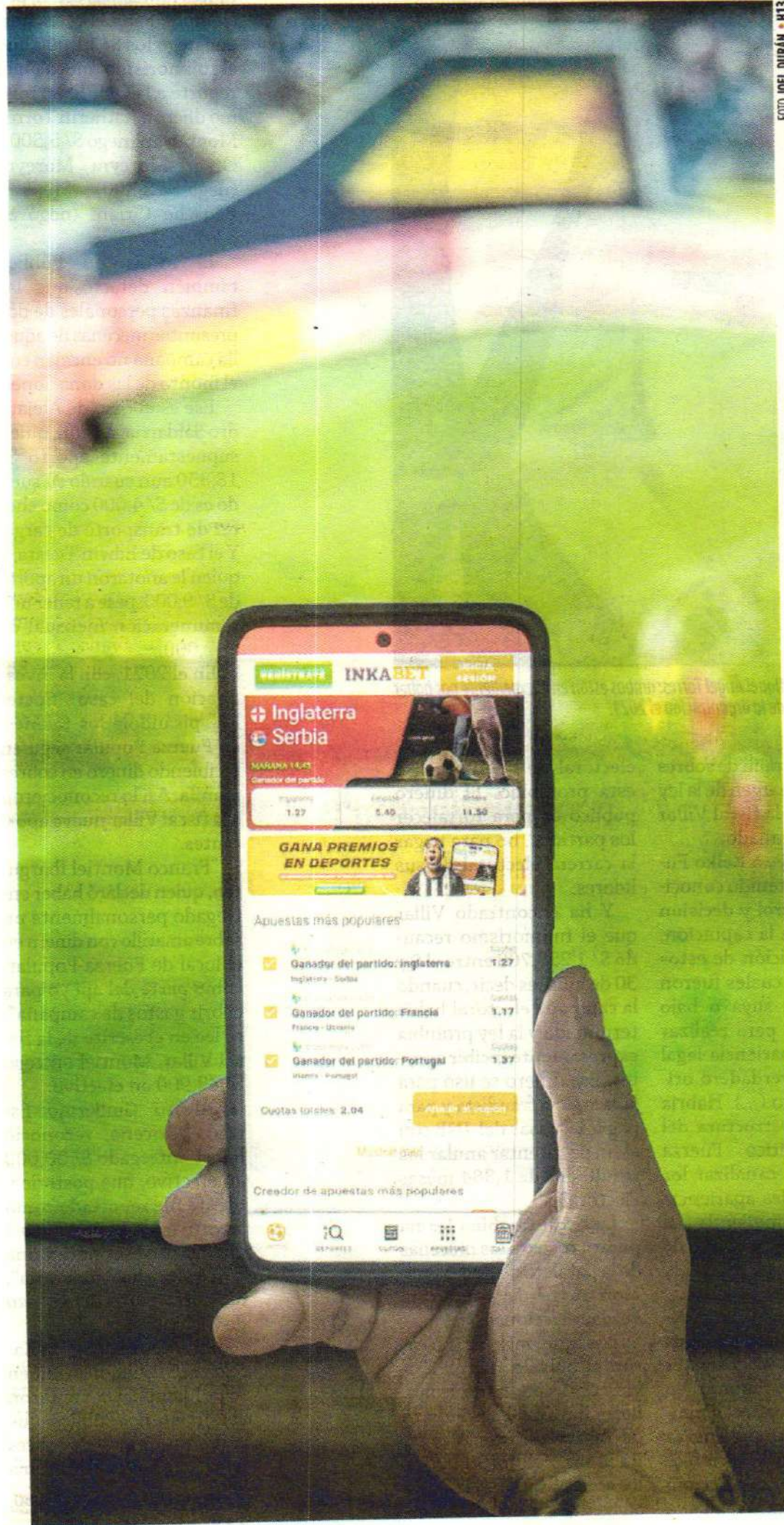


FOTO JOEL DURÁN • H13

Usuario de la plataforma Inkabet, propiedad de la transnacional Betsson, espera los resultados de un partido de fútbol. La expansión de estas plataformas tiene un correlato en la salud pública.

BRUNO AMORETTI

Perú se ha convertido en el paraíso regional de las apuestas en línea. La baja carga fiscal, la legislación defectuosa y la casi inexistente fiscalización han hecho del país una timba que mueve más de dos mil quinientos millones de dólares al año. El descontrol ha desatado una guerra entre casas de apuestas nacionales y extranjeras.

Ningún otro país de la región apuesta y gasta tanto como el Perú. Según un sondeo de Playtech, el 92% de los peruanos encuestados ha apostado al menos una vez al mes y el gasto promedio ronda los 80 dólares. En el Perú hay más de seis millones de jugadores activos, de los cuales 3,5 millones utilizan canales digitales.

Antes de la pandemia, el Estado solo tenía registro de una decena de plataformas virtuales. Hoy, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), existen 102 casas de apuestas digitales autorizadas. Sólo 27 son peruanas. Las otras 75 pertenecen a firmas extranjeras.

Hasta 2022 ninguna de estas compañías, constituidas en paraísos fiscales, pagaba impuestos ni estaba bajo fiscalización alguna. Ese año se promulgó una ley que, en teoría, regula la explotación de "los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia". La norma estableció un impuesto del 12% y mecanismos de control para que las autoridades puedan realizar inspecciones. Pero la medida no ha sido efectiva.

"Todavía existen vacíos operativos. Falta interoperabilidad entre la Sunat, la UIF y la SBS para prevenir el lavado de activos. A estas empresas les cuesta implementar sistemas sólidos de verificación de edad, trazabilidad de apuestas en tiempo real y reportes automatizados de riesgo ante conductas inusuales de los usuarios", señala Eduardo Linares, abogado corporativo de la firma Ontier.

Recién a inicios de este año algunas casas de apuestas empezaron a pagar impuestos. A ello se sumó un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del 1% por cada jugada. Los empresarios dicen que el ne-



Griego George Daskalakis, dueño de Betano. La casa de apuestas pertenece a la sociedad maltesa Kaizen Gaming International que patrocina clubes en Portugal e Inglaterra, además de la Europa League.



Sueco Tristan Sjöberg, uno de los accionistas de Betsson, el principal espónsor del torneo local de fútbol en los últimos años. Compró la casa de apuestas Inkabet en 2021.



Colombiano Juan Franco Araujo, cofundador de DoradoBet en el 2017, la segunda casa de apuestas más visitada del país. En Perú la representa Interplay World S.A.C., aunque su matriz opera en el paraíso fiscal de Curazao bajo licencia de VS Network Solutions N.V.

gocio será "insostenible".

Fue entonces cuando comenzaron a tocar las puertas del Ministerio de Economía, del Mincetur y del Congreso. La ruleta les funcionó. El MEF redujo el ISC a 0,3% durante seis meses. Pero el objetivo era mayor: evitar que el Estado cobre impuestos por operaciones adicionales como el



Programa de streaming "Enfocados", de Jefferson Farfán, patrocinado por Te Apuesto, parte del conglomerado Intercorp.



Programa "Fútbol Excitante" del canal de YouTube "La Roro Network". Es patrocinado por Apuesta Total, propiedad del fondo estadounidense Blackstone, un conglomerado financiero cuestionado por operar a través de filiales en paraísos fiscales.

re juego o el uso de bonos y promociones.

En medio de las negociaciones surgió una fractura entre las casas de apuestas nacionales y las extranjeras. Las locales reclamaban que, en el caso de las foráneas, el pago del ISC recaía sobre el usuario y no sobre la empresa. "La balanza estaba inclinada hacia los de afuera", dice una fuente del sector.

En julio pasado el Congreso aprobó una iniciativa exprés de Lady Camones (Alianza para el Progreso) que atiende todos los reclamos de las compañías peruanas. La propuesta eliminó el cobro del ISC al usuario de platafor-

mas extranjeras, trasladando la carga directamente a las empresas.

La iniciativa de Camones tuvo un respaldo casi unánime en el Congreso. El 6 de noviembre la Junta de Portavoces acordó incluirla en la agenda del pleno para su aprobación por insistencia, con las firmas de Fuerza Popular, APP, Podemos, Renovación Popular y Perú Libre.

Pero dos horas después, César Revilla, portavoz fuji-morista, retiró su firma y el proyecto se cayó. Fuentes cercanas al legislador aseguran que recibió una orden directa de la cúpula del partido, que condicionó su futura postula-

ción como diputado. "El fuji-morismo tiene la consigna de favorecer a las casas de apuestas extranjeras", afirma una fuente parlamentaria.

Mientras la ley sigue entrapada, muchas de las casas de apuestas se niegan a pagar impuestos y algunas ya iniciaron acciones de amparo para llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional. Entre ellas estaría Tío Rico, del empresario Félix Rosenberg Guttman, conocido como el "Rey de los tragamonedas".

Otras compañías anuncian su salida del país, pero continúan operando sin restricciones. Es el caso de Solbet, que en agosto comunicó su cierre

pero que ha seguido haciendo caja. "No nos quedará otra opción que irnos al extranjero, a un lugar con más flexibilidad tributaria y operar desde ahí. Al final el Estado se quedará sin sogá y sin cabra", dice un empresario del rubro.

A diferencia de Colombia o Argentina, que regularon antes su mercado y aplicaron impuestos más altos con licencias estrictamente controladas, el Perú recién ha empezado a ordenar el sector. En Colombia solo operan unas quince casas autorizadas. En Argentina, depende de cada provincia. Las más permisivas otorgaron hasta 11, pero hay las que sólo concedieron 4.

Aquí trabaja un centenar.

"Lo que necesitamos es una regulación razonable – dice Luis Durán Rojo, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica –, una que mantenga a los operadores dentro del marco legal, permita una supervisión real y reduzca al mínimo la informalidad. Sólo la formalidad le da al Estado herramientas efectivas para proteger al jugador".

Según proyecciones del sector, las casas de apuestas crecerán 6,4% anual hasta 2028.

Esta publicación revisó las quince plataformas más visitadas por los peruanos. El 95% tiene origen o vínculos con paraísos fiscales como Malta y Curazao, territorios que ofrecen ventajas tributarias y facilidades para obtener licencias de apuestas.

Encabeza el ranking Apuesta Total. Nació como empresa peruana, pero en julio de 2024 fue adquirida por Cirsá, propiedad del fondo estadounidense Blackstone, un conglomerado financiero cuestionado por operar a través de filiales en paraísos fiscales.

Le sigue DoradoBet, fundada en 2017 por los colombianos Juan Franco Araujo y William Holguín Ruiz. En Perú la representa Interplay World S.A.C., aunque su matriz opera en Curazao bajo licencia de VS Network Solutions N.V.

Inkabet, otra de las más populares, fue comprada en 2021 por Betsson, empresa sueca que ha sido el principal espónsor del torneo local de fútbol. También destaca Te Apuesto, del conglomerado Intercorp.

Betano pertenece a la sociedad maltesa Kaizen Gaming International, del griego George Daskalakis, que patrocina clubes en Portugal e Inglaterra, además de la Europa League. Bet365, otro gigante, es controlada por la inglesa Denise Coates, una de las mujeres más ricas del mundo.

Entre las recién llegadas figuran también Meridianbet, de origen serbio, y Retabet, con sede en Bilbao.

Stake es un casino online de criptomonedas con raíces australianas y constituido en Curazao.

Un caso singular es el

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

RICARDO VELAZCO

El gobierno de José Jerí le ha dado la extremaunción a la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), aquel equipo de la Policía que se volvió la pesadilla de los corruptos de alta gama y de las grandes organizaciones criminales del país. El 5 de noviembre el Ejecutivo dispuso convertirla en un anexo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincrí). Ese mismo día se suspendió "toda actividad de inteligencia y formulación de documentos de inteligencia hasta nuevo aviso", dice un informe reservado al que accedió este semanario.

"El decreto ordena que la Diviac se aboque a los temas de la Dirincrí, o sea las bandas de robo, extorsión, sicariato y delitos comunes. Nuestros objetivos eran las economías ilegales como la corrupción, la minería ilegal, la tala o el contrabando que financian a partidos políticos y candidatos que luego impulsan leyes que benefician a esos criminales", explica el coronel (r) Harvey Colchado, jefe de esta unidad policial durante sus años de "gloria".

Con el decreto que minimiza la Diviac unas cien investigaciones serán enviadas a otras dependencias. Algunos de esos casos son "Los Niños" de Acción Popular, "Los Waykis en la sombra", las investigaciones contra el exministro Juan José Santiváñez, los pagos de generales de la PNP por sus ascensos o el expediente de la "Gran Fa", una poderosa banda de minería ilegal que opera en La Libertad.

El decretazo de Jerí sólo fue el golpe final. La Diviac llevaba meses en descomposición. Dina Boluarte había socavado la unidad hasta ahogarla. Desde marzo pasado los agentes no podían extraer información de los más de 1,500 celulares incautados. Esto debido a que el programa informático que utilizaban tenía la licencia vencida.

"Este año la Diviac se ha dedicado básicamente a tareas de control de identidad. Es decir, policías especializados en mimetizarse que

El coronel (r) Harvey Colchado muestra que la Diviac realizó casi el doble de operativos que la Dirincrí entre el 2019 y el 2024.



El que fuera el equipo de la Policía más temido por los políticos corruptos y las grandes bandas criminales ahora ha quedado reducido a casi nada.



La DIVIAC de baja

► José Jerí completa la tarea empezada por Dina Boluarte y desactiva en la práctica a la unidad policial más competente de los últimos años. Es una de las más astutas revanchas de la mafia gobernante

ahora tienen que subir a micros o intervenir bares donde cualquier delincuente los puede reconocer. Los están quemando", explica Colchado.

Cuando el gobierno de Jerí declaró el estado de emergencia en octubre pasado, la jefatura de inteligencia de la Diviac dispuso que sus agentes se dediquen a "identificar los

puntos de mayor incidencia delictiva para realizar operaciones policiales de prevención del delito".

La Diviac se fundó el 29 de agosto del 2016 y se inspiró en la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro. En abril del 2017 celebraron el primer gran triunfo cuando desarticularon la banda de

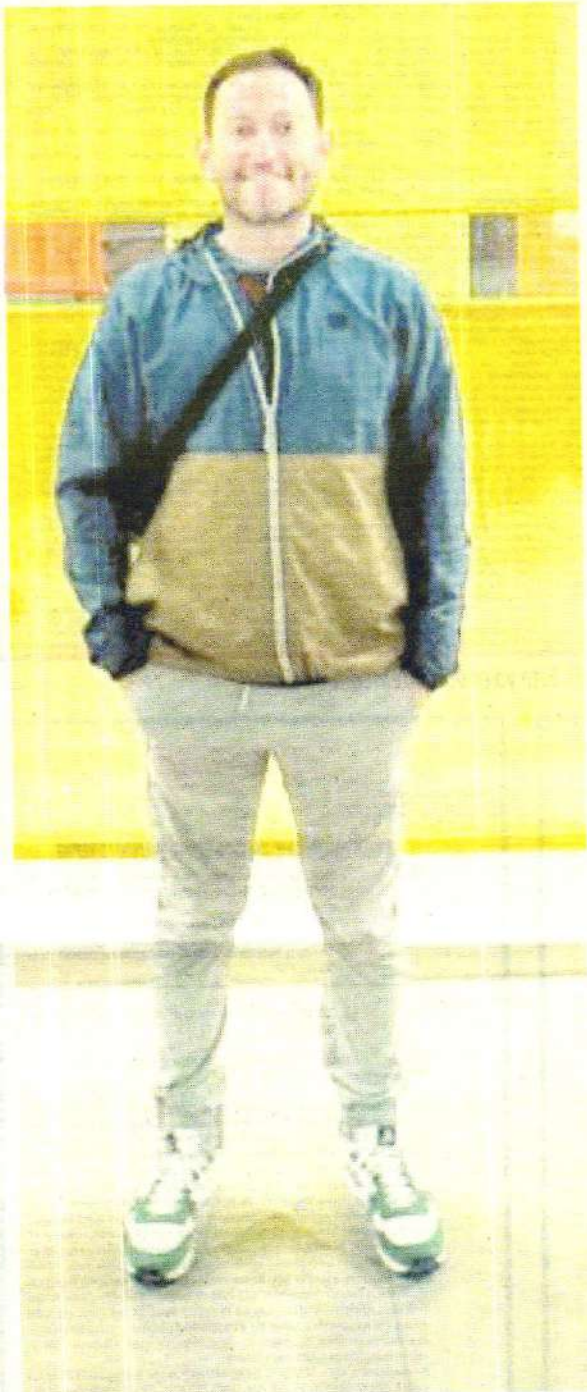
"Los Rucos de Chilca", una organización dedicada a la extorsión, tráfico de tierras y sicariato. Estaba conformada por 37 personas, incluyendo al alcalde de ese distrito, Richard Ramos.

En los años que siguieron la Diviac ganó tal prestigio que los fiscales de los casos más emblemáticos los convocaron para sus

investigaciones. Así, la unidad participó del caso "Cuellos Blancos". Por este se pusieron tras los pasos del actual Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. También colaboraron en el caso Odebrecht, lo que implicó la detención de Keiko Fujimori, el arresto fallido de Alan García y el allanamiento de la casa de Pedro

Roosevelt en guerra

► INDECOPI multa al colegio más caro del país por incluir en su biblioteca libros sexualmente explícitos a los que pueden acceder alumnos entre los 11 y los 17 años



Indecopi responsabilizó al director del Colegio Roosevelt, Elio Jordan King, por la presencia de los 21 libros cuestionados en la biblioteca.



FOTO ARCHIVO • H13

Exministra de Educación y socióloga Patricia Salas O'Brien: "No nos quedemos en el color de la hoja del árbol, veamos el bosque. Ahora corresponde investigar qué intereses hay detrás de esta decisión, que busca impedir que los adolescentes puedan decidir qué leer sobre su educación y su sexualidad".

FABRICIO CABRERA BUDEN

La controversia está servida. Indecopi acaba de sancionar a uno de los colegios más elitistas del país por incluir en una de sus bibliotecas novelas con contenido sexual explícito. La multa enfrenta a los extremistas del conservadorismo y a los radicales del movimiento woke. La mayoría de las novelas censuradas cuentan historias homosexuales, pero hay también agresiones sexuales y pedofilia, o

un padre que viola a su hija, por ejemplo. De un bando y de otro defienden su terreno palmo a palmo. En medio, los usuarios de la biblioteca, adolescentes de entre 11 y 17 años.

"Me besa con labios húmedos y con sabor a cebolla. Me clava los dientes en el labio inferior. Bajo su peso, no puedo ver, moverme ni respirar. Tantea con sus pantalones, me separa las piernas y noto cómo se mete entre mis muslos. Jadeo, pataleo y me retuerzo. Me mete la lengua en la boca", se lee en la página 102,

de "Sold", un libro de Patricia McCormick. La novela, uno de los 21 textos que Indecopi ha puesto en la mira, narra la vida de una niña de 13 años de un pueblo de Nepal que, huyendo de la pobreza, termina en las garras de una mafia de trata de personas y prostituida en un burdel en Katmandú.

También está en la lista el libro "Los ojos azules". Su autora es Toni Morrison, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1993. En el libro hay pasajes como este: "(...) La bestialidad no se le ocurrió y la sodomía estaba

fuera de discusión, porque él no experimentaba erecciones sostenidas y no podía soportar la idea de que otra persona sí las pudiera experimentar. Y, además, lo único que le disgustaba más que adentrar y acariciar a una mujer, era acariciar y ser acariciado por un hombre".

La novela de esta controvertida sanción al colegio Roosevelt comenzó a escribirse en YouTube a mediados del 2024. Francisco de Piérola, un conocido tiktokero simpatizante de movimientos conservadores, denunció que había recibido

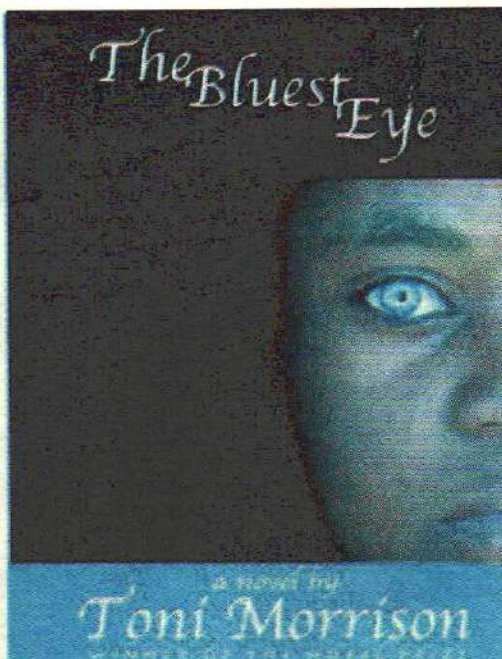
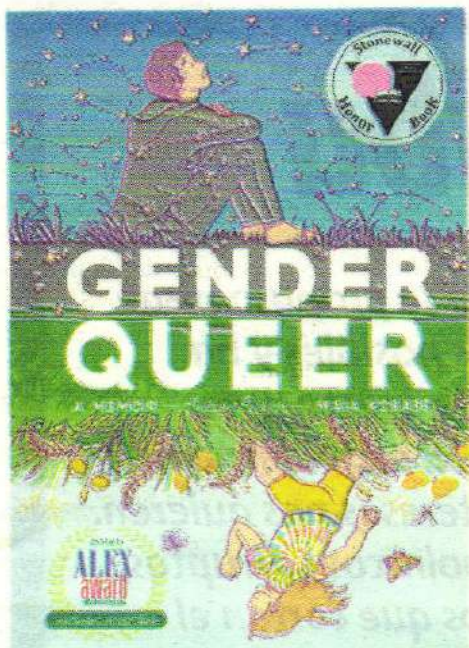
un correo anónimo que daba cuenta de que en este centro educativo "se impartía clases de teoría de género y que en la biblioteca había libros obscenos, pornográficos". Un mes después la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros (AINCUS) tomó el guante y denunció al colegio ante Indecopi. El ente regulador se tomó 16 meses en resolver y sancionar al colegio.

Indecopi ha hecho suya la posición de los denunciantes y ha resuelto que los libros contienen material "totalmente inadecuado" para menores de edad, con pasajes de "contenido sexual" y referencias al "abuso de sustancias" que podrían afectar la salud mental de los estudiantes. Sancionó al centro educativo con S/141,433.

En la resolución de 109 páginas señala que el colegio violó al menos cuatro artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor al permitir la lectura de libros como "Felix ever after", de la escritora Kacen Callender. La novela cuenta la historia de un chico de 17 años, transexual, que narra sus experiencias sexuales de manera bastante explícita: "Él pone una mano en mi cara, la otra en mi nuca y empujo mi boca contra la suya, con tanta fuerza que mi diente roza su labio inferior. Retrocede un centímetro y murmura. Lo atraigo hacia mí nuevamente. Todo lo que puedo sentir son sus labios, su mano debajo de mi camisa, en mis piernas, arriba y debajo de mi espalda y puedo sentir su erección".

Los 21 libros sancionados no pertenecen a la malla curricular obligatoria del Roosevelt. Son libros que están en las estanterías de una de las bibliotecas del centro, concretamente la "Middle School and High School", a la que tienen acceso los estudiantes de entre 11 y 17 años. Y quizá ese es el meollo de la cuestión, la idoneidad de los textos teniendo en cuenta que los libros están al alcance de púberes.

Pedro Rondón, sexólogo del Instituto de Terapia Sexual, Educación y Orientación, señala que cuando se habla de un libro con contenido sexual en un colegio los padres deberían, por lo menos, estar enterados del contenido que podrían ver. "El adolescente aún no ha desarrollado su



Tres de las publicaciones consideradas inapropiadas por Indecopi a solicitud de un grupo conservador.



FOTO CESAR ZAMALLOA • HT3

Uben Atoche Kong: "¿Quiénes son los desgraciados que les están dando este material a los niños? Todos los padres se han quedado escandalizados. Un niño crece en una familia con mamá y papá".

capacidad de discriminación", dice.

Uno de los textos que más polémica generó fue un cómic. Se titula "Gender Queer: A memoir", una suerte de historia autobiográfica de la autora Maia Kobabe. En el libro narra sus experiencias sexuales como "no binaria". "No siento nada, esto es mucho más caliente cuando solo era en mi imaginación", dice la protagonista del libro en uno de los capítulos. La viñeta es más explícita: aparecen dos hombres jóvenes practicando sexo oral.

También se incluyeron seis libros de la autora estadounidense Ellen Hopkins, conocida por sus novelas juveniles. Algunos de sus títulos, como "Crank" (2004) e "Identical"

(2008), también censurados, han figurado en la lista de "The New York Times Best Seller". La asociación señaló de que ambos textos presentan "detalles perturbadores", escenas explícitas de abuso sexual de un padre a su hija, relaciones inapropiadas y búsqueda del sexo para "llenar vacíos existenciales".

Indecopi reconoce que no ha revisado los libros y alega que no es su competencia. "(...) No existe norma que le permita revisar el material de las bibliotecas escolares", señala el ente regulador. Como no puede actuar como órgano censor, para multar al Roosevelt Indecopi argumenta que el colegio incumplió cuatro artículos del derecho del consu-

midor afectando dos deberes importantes: el de idoneidad, al no brindar un servicio educativo de calidad y acorde con lo ofrecido, y el de seguridad, al no evitar riesgos para la salud, en este caso específico la salud mental de sus alumnos.

Indecopi no quiso dar su versión para este reportaje. Tampoco el colegio.

José Carlos Gonzales, abogado especialista en protección al consumidor, considera que la sanción es una medida exagerada. "Una cosa son los libros que están en la malla curricular como plan lector y otra los que un estudiante puede ir y elegir libremente en su biblioteca para leer", explicó. Y añade: "El caso es novedoso, pues no existen antecedentes

de este tipo de sanciones a colegios. Ahora Indecopi decide qué es bueno y qué es malo".

La exministra de Educación y socióloga Patricia Salas O'Brien considera que la sanción niega la realidad. "El día a día, el internet y el consumo excesivo de la cultura moderna están hipersexualizados, y pretenden echarle la culpa a un colegio y al sistema educativo. Es una excusa para la intromisión de ciertas agendas conservadoras", advirtió.

En la otra trinchera, la de la asociación que interpuso la denuncia, se sienten satisfechos. "Se espera que el Roosevelt sea todo de primera y tenga productos de primera. La referencia que se tiene es que el director tiene su incli-

nación, su orientación sexual. Yo no discrimino, pero lo digo porque tú no puedes influenciar a los niños menores de primaria y secundaria hacia una tendencia. No les puedes decir que si te gusta tu amigo, lo tengas que besar. Los niños llegaban llorando a su casa", dice Uben Atoche, presidente de AINCUS, la asociación denunciante.

"Yo entiendo que los libros con índole sexual existen. Por ejemplo, 'Matalaché', ese libro está en la malla curricular, sí, y hay de todo y los chicos lo leen. Nosotros hemos denunciado libros sexuales con contenido homosexual. Indecopi fue a hacer una inspección y levantó la lista de libros", dice Atoche.

Tratamos de recoger la versión de padres del colegio. Atoche asegura que tienen miedo a las represalias y que no quieren declarar. "Están siendo amenazados", señala. No podemos dar fe de lo que dice Atoche, pero es cierto que todos los intentos por recoger la versión de los padres de familia fracasaron.

Indecopi multó al director del colegio, Elio Jordan King, con una sanción de S/5,350 porque considera que tiene responsabilidad específica en el material que llega a la biblioteca.

La psicóloga y exviceministra de Gestión Pedagógica, Ana Patricia Andrade, advierte del peligro de que sea Indecopi el que decida qué libros deben estar en las bibliotecas de los colegios. "¿Quién puede opinar sobre este tipo de material? Lo debe hacer alguien con experiencia pedagógica, no Indecopi. ¿Bajo qué criterios Indecopi considera que los libros son inadecuados? ¿Quién los evalúa? ¿No deberían hacerlo expertos?", se pregunta.

El abogado Omar Damián Medina se presenta como el encargado de articular las demandas de los padres de familia del Roosevelt. "La causa de la demanda no contiene ningún tinte político ni tenemos relación con algún partido que quiera sacar rédito de esto", señaló. En su cuenta de LinkedIn, el abogado de los padres del Roosevelt confiesa que esto es parte de "dar la batalla cultural". Lo cierto es que los desmanes del extremismo woke han desatado, no sólo en el Perú, reacciones ultramontanas que quisieran regresarnos al siglo XIX. ■

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea.

Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.



Donar aquí con Yape

975 525 500

Columnistas contra "The New York Times"



DANIEL ESPINOSA

Más de trescientos escritores, académicos, políticos y activistas –incluyendo a unos ciento cincuenta que en el pasado han contribuido con columnas de opinión a "The New York Times" (NYT)– redactaron una carta abierta advirtiendo que no publicarán en ese diario hasta que no cumpla con tres demandas: que haga una revisión crítica de su sesgo antipalestino, que rectifique su fraudulenta investigación sobre un alegado "patrón de violencia sexual" durante los ataques de Hamás de octubre de 2023, y que exija que Estados Unidos le imponga un embargo de armas a Israel.

Aunque estas demandas fueron hechas el pasado 27 de octubre, ni el "Times" ni ningún otro representante de la gran prensa de Occidente y la periferia han informado al respecto. Este silencio conveniente –idéntico al observado cuando un centenar de empleados de la BBC firmaron una carta denunciando el sesgo antipalestino dentro de su medio– tiene por objetivo salvaguardar el ya bastante mellado prestigio de la prensa corporativa.

Sobre la primera demanda, referente al sesgo antipalestino del "Times", cabe recordar que en abril de 2024 se filtró un revelador memorándum que la plana editorial de "The New York Times" había enviado a sus reporteros. Ahí se les exigía que, al informar sobre Gaza, evitaran emplear términos como "genocidio", "limpieza étnica" y "territorios ocupados" ("The Intercept", 15/04/24).

La filtración referida no había sido la primera: en enero de 2024, "The Intercept" ya había recibido información que detallaba cómo uno de los podcasts del "Times" había tenido que cancelar la emisión de un episodio en el que se denunciaría ese supuesto "patrón de violencia sexual" durante los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. La cancelación respondía a que la evidencia que sustentaba el reportaje era floja y algunos reporteros se estaban quejando.

Un artículo de "Vanity Fair" al respecto cuenta que esta filtración enfu-

reció a los editores del "Times", quienes iniciaron una "cacería de brujas" al interior del medio con el objetivo de dar con los periodistas que habían hablado en secreto con "The Intercept". Al respecto, Susan DeCarava, presidenta de NewsGuild –el sindicato de periodistas más importante de EE. UU.–, declaró que la investigación interna de "The New York Times" estaba generando un

"efecto paralizante y odioso en toda la redacción, silenciando de facto cualquier debate interno..."

DeCarava denunció que varios reporteros del diario neoyorquino habían sido sometidos a cuestionamientos "particularmente hostiles" por atreverse a dudar de la veracidad del reportaje "Gritos sin palabras", publicado el 28 de diciembre de 2023 en el "Times"



Periodistas Contra la Guerra de Gaza protestan en la sede del "New York Times", 14 de marzo de 2024. (Foto: Julia Sharpe-Levine).

para denunciar el ya referido "patrón de violencia sexual".

La segunda demanda de los más de trescientos escritores que ya no escribirán para "The New York Times" hace referencia precisamente a ese reportaje. Al respecto, los críticos notaron que las declaraciones usadas por el diario para sustentar su información caían en discrepancias e incoherencias bastante gruesas. Además, parte de la información se basaba en declaraciones de dudosos testigos anónimos, cuando no en versiones que luego fueron denunciadas como inexactas o falsas por los familiares de las supuestas víctimas de violencia sexual.

A pesar de estas falencias –notadas, como vimos, por los mismos reporteros del "Times"–, el editor ejecutivo del diario, Joe Kahn, presentó el reportaje "Gritos sin palabras" como un "signature piece", es decir, como una destacada muestra del periodismo que su diario es capaz de realizar. Como Kahn –hijo de un importante lobista dedicado a

presionar a medios periodísticos para modificar su cobertura en favor de Israel–, varios editores y reporteros del "NYT" tienen vínculos cuestionables con el régimen Netanyahu, el lobby proisraelí y hasta el ejército israelí.

Un ejemplo es Natan Odenheimer. Antes de incursionar en el oficio periodístico, Odenheimer perteneció a la Unidad Maglan, un comando de élite del ejército israelí. Ahora es corresponsal del "NYT" en Jerusalén. En una extensa biografía de sí mismo publicada en la web del diario, Odenheimer no menciona ni una sola palabra sobre su pasado militar, lo que constituye un tremendo y bastante obvio insulto a la ética periodística.

Otro ejemplo es Isabel Kershner, quien en más de una ocasión ha reportado para el diario neoyorquino citando información elaborada por un *think-tank* asociado al régimen israelí en el que trabaja su esposo, pero sin revelarles a sus lectores este lazo. Para colmo, este *think-tank* –el Institute for National Security Studies– tiene por una de sus misiones dar forma a la imagen pública de Israel en los medios de comunicación (FAIR, 01/05/12).

El público ignora que el "diario récord" está repleto de reporteros como Khan, Kershner y Odenheimer, quienes ocultan sus conflictos de interés en favor de la propaganda del genocidio. ¡Qué poco sabemos de lo sucia que es la prensa corporativa! Si la gente estuviera al tanto, entendería de inmediato que estas democracias ya no son democracias, en gran medida, porque ese periodismo tampoco es periodismo.

La carta abierta firmada por ex-columnistas del "NYT" y decenas de líderes de opinión señala cómo el diario neoyorquino reconoció sus "errores" (en realidad, mentiras y propaganda) con respecto a las "armas de destrucción masiva" iraquíes, por lo que no debería ser tan difícil que se retracte también de noticias falsas como "Gritos sin palabras" o haga autocritica de su sesgo antipalestino. En esa línea, consideran que el "Times" eventualmente podría llamar al Gobierno estadounidense a imponerle un embargo de armas a Israel.

Creemos que los firmantes pecan de ingenuos o están haciendo una lectura incorrecta de estos feos tiempos: en realidad, estamos ante un aparato de propaganda que está quemando sus últimos cartuchos, a sabiendas de que, luego de haber fungido de apañadores y apologistas de un genocidio transmitido en vivo, el prestigio perdido jamás volverá.

VARIOS EDITORES Y REPORTEROS DEL "NYT" TIENEN VÍNCULOS CUESTIONABLES CON EL RÉGIMEN NETANYAHU

El crédito merece una revolución



PEDRO FRANCKE



Empresas pequeñas: las tres cuartas partes de los préstamos que reciben no provienen de los bancos.

Las pequeñas empresas en el Perú, cuando consiguen un crédito, pagan 20 por ciento al año más que una gran empresa. En los países de la OCDE esa diferencia es en promedio de sólo 2 por ciento, en Chile y México es de 4 por ciento. En las condiciones peruanas las pequeñas empresas jamás podrán competir con los grandes monopolios. Imagínense que una pequeña empresa quiera producir aceite o leche evaporada, donde hoy una o dos grandes empresas tienen el control del mercado. Si consiguen financiamiento, cada año deberán pagar 20 por ciento más, lo que significa un costo adicional enorme. Varios monopolios en el Perú tienen ventajas adicionales. Por ejemplo, Alicorp, que domina el mercado de aceite de cocina, es parte del grupo Romero, que también posee la AFP Prima y el Banco de Crédito, lo que le permite tener fondos con mucha facilidad a muy bajo costo.

Mientras en la OCDE la mitad de todo el crédito va a las pequeñas empresas, en nuestro país, aunque generan el 85 por ciento del empleo, las pequeñas empresas solo reciben el 30 por ciento del crédito. Ojo que para las pymes que pueden tener crédito, este no procede generalmente de los bancos: las tres cuartas partes de esos préstamos son de las cajas y las cooperativas. El último informe sobre la economía peruana de la OCDE resalta que casi la mitad de

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) carecen de acceso al crédito formal. Las MIPYME dirigidas por mujeres tienen menos posibilidades aún y el acceso al financiamiento fuera de Lima es particularmente es-

caso. Un estudio reciente del Banco Mundial encuentra que la calidad de los mercados financieros en América Latina es de los más bajos entre todas las regiones del mundo.

¿Qué se puede hacer para que las pequeñas empresas accedan a préstamos baratos y de esa manera crezcan y sean más competitivas? Muchos países tienen grandes programas públicos con esa finalidad, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Brasil y Chile. Hace una década, con el equipo económico de Verónica Mendoza, propusimos otorgar 10 mil millones de soles de créditos a las pymes. PPK no quiso hacerlo. Luego vino la pandemia y se lanzó el programa llamado Reactiva para dar apoyo financiero a las empresas. Los primeros meses estos fondos llegaron poco a las pymes, pero luego de que se reajustaron las condiciones para una segunda etapa, se les llegó a dar 25 mil millones de soles de préstamos. Para las micro y pequeñas empresas eso significó un crecimiento del crédito del 28 por ciento. Se llegó a apoyar a 480 mil pymes, de las cuales 390 mil accedieron solo con DNI y sin RUC, es decir siendo informales, y eso que no se permitió que las cooperativas de ahorro y crédito y el Banco de la Nación también operaran ese programa. Las tasas de interés bajaron hasta 4 por ciento anual para las pymes, cuando poco antes las microempresas pagaban 33 por ciento y las pequeñas 18

por ciento en promedio. Lamentablemente, luego de la pandemia no se dio continuidad a un programa amplio de crédito a las pymes y ahora sólo hay fondos de mucho menor tamaño con ese fin.

La propuesta que tenemos ahora desde la izquierda es la de un programa de 20 mil millones de soles de créditos baratos a las pymes. Una cuestión importante, que no se hizo con Reactiva, es que ese financiamiento ayude a que el sistema financiero tenga más competencia y presione a bajar las tasas de interés a las que prestan los bancos. Hay varios actores que pueden meterle presión competitiva al oligopolio bancario. Las cajas municipales han mostrado un buen manejo técnico y han ampliado mucho su alcance en las últimas dos décadas, pero podrían avanzar mucho más si se las respalda financieramente. Están también las cooperativas de ahorro y crédito, que se han desarrollado bastante. En el pasado estuvieron poco supervisadas, lo que permitió que algunas de ellas terminaran siendo fachadas de grandes estafas, pero ahora la Superintendencia de Banca (SBS) las regula y vigila de cerca. Aun sin ningún apoyo estatal las cooperativas dan una cuarta parte de todo el crédito para las microempresas, y pueden ser un puntal de apoyo a una nueva economía solidaria e inclusiva, que aliente la generación de empleo de forma masiva.

He dejado para el final la necesidad de una banca de desarrollo. En nuestra gestión ministerial, junto con Gustavo Guerra-García, que fue miembro del directorio del Banco de la Nación, se hicieron planes para su modernización digital y se planteó una iniciativa legislativa para que nuestro banco estatal pudiera servir mejor y con más alcance a las pymes. El Congreso mafioso lo bloqueó, lo que puede relacionarse a que el presidente del Banco de Crédito era Dionisio Romero, que le había regalado 3 millones 700 mil dólares a Keiko Fujimori. A Romero y los suyos un mercado más competitivo les puede hacer perder miles de millones. Tampoco querían que saliera adelante el *factoring*, que es una forma de financiamiento usando las facturas de venta, pero como eso podíamos hacerlo sin el Congreso, lo sacamos adelante.

Es tiempo de insistir en una banca de desarrollo moderna, vinculando a Agrobanco, COFIDE y al Banco de la Nación. Se podría así dar crédito barato, articulado con asistencia técnica y de gestión, a millones de pequeños empresarios en todas las provincias. Con eso impulsaríamos el emprendedurismo en sectores como turismo, industria, agricultura, gastronomía y transporte. Además, así se pondría presión competitiva sobre las tasas de interés que cobran los bancos por sus créditos. Hay que abrir paso a una época de cambios con el objetivo de revitalizar la generación de empleos en todas las regiones.

HAY VARIOS ACTORES QUE PUEDEN METERLE PRESIÓN COMPETITIVA AL OLIGOPOLIO BANCARIO

¡Que el Jurado Electoral Especial castigue al fujimorismo!



RONALD GAMARRA

Un caso sencillo expone, por enésima vez, el canallresco modo de operar del fujimorismo. El 30 de octubre se descubrió casualmente a un camarógrafo que grababa con una cámara del Congreso un raleado mitin de la chica Keiko en Huanchaco, organizado para lanzar la cuarta candidatura presidencial de la eterna perdedora. El hecho ha sido descrito como una violación del principio de neutralidad electoral, al ponerse personal y equipo del Estado al servicio de la campaña electoral de un partido. El asunto está bajo investigación del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo.

Sorprendidos en plena faena, los fujimoristas procedieron a un inmediato control de daños. El presidente encargado del Congreso emitió un comunicado anunciando que el trabajador responsable, a quien no se mencionaba por su nombre, había presentado su renuncia y ya no afanaba más en el antro ese. Así pretendían dar por cerrado el caso. Dirigentes naranjas enfatizaron la responsabilidad exclusivamente personal del servidor, exonerando a su partido.

El asunto no es así. Los hechos demuestran que el compromiso de la organización de Keiko es algo evidente. El camarógrafo es simplemente el punto más débil de la cuerda, el sacrificio que es necesario hacer para mantener todo el poder de decidir y hacer lo que les da la gana con los bienes públicos que están a su disposición. Porque eso ha sido y sigue siendo el fujimorismo: una telaraña que cubre y se apodera del Estado para servirse y beneficiarse de él. Lo demostraron en el gobierno del viejo Alberto, lo vuelven a hacer hoy, cuando encabezan el cogobierno del pacto mafioso.

Repasemos con algún detalle la línea jerárquica que va desde el camarógrafo hasta el propio presidente encargado del Congreso. Veremos que no hay la menor posibilidad de que ningún trabajador de este sector se tome atribuciones por la libre, peor aún llevarse un aparato costoso como es una videocámara, sin que sus jefes lo sepan, es decir, sin que sus patrones lo ordenen. Estamos convencidos de que este es precisamente el caso: un camarógrafo que va a cubrir un evento del partido por disposición de sus superiores, pues

el partido fujimorista se siente con todo el derecho de disponer, usar y abusar de los bienes del Estado.

Daniel Luza Amésquita. Se trata del camarógrafo que fue sorprendido con la cámara del Congreso en el mitin de Keiko en Huanchaco. Es un probado militante fujimorista. Los periodistas han logrado identificar un caso en el cual aparece como aportante de una suma de dinero en la campaña electoral de 2023. Cuando fue descubierto con la

videocámara en la mano, se desempeñaba como trabajador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Wilfredo Ponce de León es el superior inmediato de Daniel Luza, en su calidad de jefe del área de atención ciudadana, una de las dos áreas de la Oficina de Participación Ciudadana. Es un militante fujimorista hasta los tuétanos. Trabaja en el Congreso desde 1995; sin embargo, su carrera sufrió un corte abrupto hacia el año 2018,



La jefa de Fuerza Popular en el evento grabado por Daniel Luza para Producciones Congreso.

cuando se descubrió que estaba involucrado en la búsqueda de testigos o falsos aportantes del caso por el cual se investigaba entonces a Keiko Fujimori. Esto generó un escándalo que le costó el puesto de jefe de la Oficina Legal y Constitucional y su despido del Congreso. Regresó tiempo después y desde julio de 2023 está al frente de su actual jefatura.

Edwin Lévano Gamarra es el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Antes, fue procurador público del Congreso, nombrado en 2016 por el Ministerio de Justicia a propuesta de Luz Salgado, entonces poderosa presidenta del Congreso con mayoría absoluta fujimorista. Se trata de un fujimorista de larga data y experiencia. Está registrado que al menos entre los años 2013 y 2016 aportó más de 7 mil soles al partido, considerando solo lo que figura en la ONPE. Su nombramiento como procurador fue ampliamente cuestionado precisamente por favorecer a un aportante de campaña.

Fue personero legal de Fuerza Popular en procesos electorales como el de las elecciones municipales y regionales del 2014. También fue asesor principal del entonces congresista fujimorista Julio Rosas.

Jaime Abensur Pinasco, encargado de la Oficialía Mayor del Congreso durante la ausencia vacacional del titular Giovanni Forno, fue candidato fujimorista al Congreso en las elecciones de 2021. Su cargo actual es el de Director General Parlamentario. Hace un tiempo fue denunciado por plagio. Había publicado un artículo en el cual copiaba 27 párrafos de diferentes autores. El texto se publicó en el blog Cuarto Intermedio, a cargo de Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso. El caso dio lugar a una investigación del Ministerio Público.

Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso, es el funcionario favorito del fujimorismo, que les ha servido en numerosos enredos y les ha ayudado a sortearlos. Uno de los casos más recordados es el de la red de prostitución que se había tejido en el Congreso, puesta al descubierto con el asesinato de Andrea Vidal, que figuraba como trabajadora del Congreso. Forno fue quien, en su calidad de Oficial Mayor, nombró en el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional, donde supuestamente laboraba la occisa, a Jorge Torres Saravia, a quien se sindicó como líder de la supuesta organización. Cuando se le pidieron explicaciones, Forno dijo no recordar quién le había recomendado a Torres Saravia, a pesar de que este declaró que fue Forno quien lo llamó para ofrecerle el puesto.

Fernando Rospigliosi, actual vicepresidente del Congreso, está encargado de la presidencia de la mesa directiva desde el 10 de octubre de este año. La Oficina de Participación Ciudadana está adscrita a la presidencia del Congreso. Rospigliosi es militante fujimorista furibundo, provocador y ambicioso. Todos saben de quién se trata. No hace falta decir más.

Que ahora no nos vengan con cuentos. La cadena jerárquica demuestra ser cien por ciento fujimorista. Una línea de mando y orden, donde todo está hecho para el control. Una línea en la cual se ve cómo se premia con trabajos privilegiados en el Congreso a los militantes del partido fujimorista. Esa historia de que Luza se escapó con la cámara del Congreso, en víspera de feriado, no precisamente para grabar una fiesta con sus amigos, sino, qué casualidad, el mitin de lanzamiento de la candidatura presidencial de la jefa de todos ellos, no la cree nadie. Él actuó cumpliendo órdenes, pero fue sorprendido y denunciado. Tal es la única explicación razonable. El Jurado Electoral Especial debe sancionar y dar paso a la investigación penal que corresponde. ■

**QUE AHORA NO NOS
VENGAN CON CUENTOS**



Libros y condena

No salía de mi cuarto. Repantigado, sintiendo la levedad como un goce y el estilo de manganzón como una norma, devoraba los libros que me caían, que me prestaban, que me regalaban, que a veces compraba. Los libros me

malhicieron, se robaron mi adolescencia, me impidieron calles y tumultos que tanto bien me habrían hecho. Pero también me salvaron.

Viajé con ellos, conocí otras maneras de amar y recordar, contraje palabras de cuya existencia no tenía idea, robé músicas, me encendí y apagué al mismo tiempo. Y cuando salía a la calle, la vida no se parecía mucho a los libros y ahí me di cuenta de que el problema no eran los libros sino la vida misma. Porque la vida, pensaba, era un libro sin editar, una prueba de galera tirada en el piso, un borrador sin terminar, un texto que no había pasado por ninguna corrección.

Cuando tuve que trabajar, sin embargo, tuve que aceptar las reglas del malvivir y tolerar ruidos y mugres. Raskolnikov no existía: el que salía en los vespertinos era un choro que había

matado a una vieja en la puerta del mercado central porque necesitaba comprar pasta básica. Leopoldo Bloom no se acostaba al lado de la réproba Molly: el que hacía los panetones se apellidaba Winter y terminaría vendiéndole el canal a Montesinos. Roquentin era ñanga: el verdadero absurdo, el letal, estaba en las gavetas de los escritorios ministeriales, donde se hongueaban los expedientes que no debían seguir su curso porque no había habido pago en negro. Zavalita éramos todos, con la diferencia de que no nos preguntábamos cuándo se había jodido todo porque estábamos tan jodidos que ya ni siquiera nos hacíamos ese tipo de preguntas.

Los libros –los verdaderos, no los que dan consejos– se hicieron, en efecto, para crear un mundo paralelo donde todo parece tener sentido. El novelista edita el caos, omite los largos tiempos muertos de la cotidianidad, corrige las sombras excesivas y nos entrega una historia redonda: una vida como debió ser. Lo demás es lo que solemos creer que es vida: los días clonados, la tetudez que recae, la mala hora.

El castigo perfecto para un lector de libros es condenarlo, por ejemplo, a ser comentarista de la política peruana e internacional.

Ese es el castigo que un tribunal invisible y todopoderoso me infligió hace mucho tiempo.

–¿Te crees especial? –me preguntó el tribunal con voz de comandancia en jefe.

No dije nada de puro miedo.

–Pues entonces escribirás cada semana una columna que trate de política –anunció el tribunal.

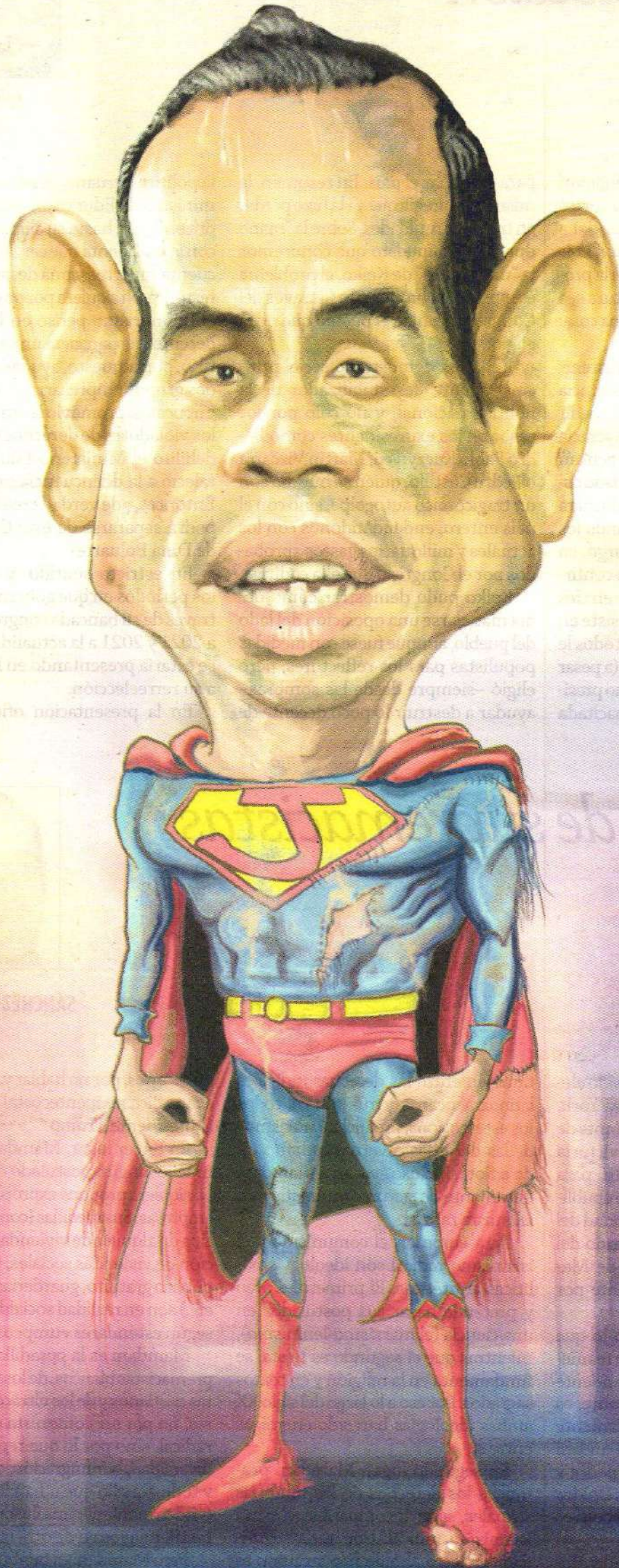
Y así ha sido. Todas las semanas, los nombres de lo peor, los egos de los monos más alzados, las voces de las moralmente difuntas. Todas las semanas las marquesinas del teatro guiñan los

mismos nombres en esta parodia grosera de humanidad. Aquí son los Fujimori, los Toledo, los Castillo, los García o los PPK. Allá, en la OCDE y el G-7, están Trump, Macron, Netanyahu, Úrsula von der Leyen. Aquí y allá: gentuza para un mundo que ni siquiera sabe que agoniza, maniacos que nos han hecho creer que este circo plagado de payasos asesinos se llama Orden Mundial.

Cada semana, entonces, la tortura de decir cosas distintas sobre gente que hace lo mismo en un mundo que sólo sabe reincidir. Me vengaré leyendo. Quiero retomar los diarios de Adolfo Bioy Casares en torno a su amistad con Jorge Luis Borges. Tienen más de 1,600 páginas. Pastaré en ellas cuanto pueda. Me echaré luego a rumiar ■



Jerí según ciertos sondeos



Keiko quiere una nueva reelección

Que la señora Keiko Fujimori haya elegido como socios de plancha presidencial a los siempre súbditos Luis Galarreta y Miguel Torres y que la propuesta símbolo de su candidatura sea la “mano dura” solo significa una cosa: desea perder a toda costa.

Keiko pudo haber hecho un esfuerzo eligiendo a dirigentes de provincia para sus vicepresidencias. Pudo pedir perdón por el boicot a la democracia que sus sucesivas bancadas practican desde 2016, pudo deslindar del lado oscuro de su padre y asegurar que luchará contra la delincuencia respetando los poderes del Estado. Sin embargo, su mensaje de inicio de campaña confirmó lo contrario, resumiéndose en tres conceptos: el fujimorismo persiste en sus convicciones noventeras, todos le debemos algo a su padre, y ella (a pesar de no haber trabajado sino como presidenta de su partido) sí está capacitada

para gobernar el país. En resumen, la misma estrategia que ya la hizo perder en tres oportunidades. Sobre la “mano dura”, por supuesto que conocemos la “mano dura” de Keiko, el problema es que solo la ha ejercido (a través del Congreso) contra el pueblo que no la eligió.

Keiko ha demostrado ser el principal agente desestabilizador de la política nacional, y no solo por los casos de los expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o Pedro Castillo, quien se hundió con un tragicómico autogolpe, sino con el país entero, endeudándonos con los actuales y millonarios gastos aprobados por el Congreso que ella codirige.

Keiko pudo demostrar cómo debía manejarse una oposición del lado del pueblo, aunque fuese con medidas populistas para los reflectores, pero eligió —siempre desde las sombras— ayudar a destruir lo poco decente de

la política peruana, desde censurar al ministro de Educación Jaime Saavedra en 2016, hasta su alianza en 2022 con la presidenta que cargaría con cincuenta muertos y una desaprobación histórica. Ni siquiera por pragmatismo el fujimorismo pensó en hacer algo decente que pareciera un cambio. Prefirió, por supuesto, ayudar a los grandes grupos empresariales a no pagar impuestos, promovió la amnistía para los violadores de derechos humanos, debilitó el Ministerio Público y fortaleció a la delincuencia organizada. Entonces, ¿de verdad cree Keiko que podrá separarse de este Congreso y de Dina Boluarte?

En estricto sentido, y contando los periodos en que gobernó el país a través de su bancada congresal (2016 a 2021 y 2021 a la actualidad), Keiko se estaría presentando en la práctica a su rerreelección.

En la presentación oficial de su



YBRAHIM LUNA

candidatura en Trujillo, cerca al óvalo Huanchaco, Keiko aseguró que el fujimorismo tiene las agallas y los pantalones bien puestos y que ella está harta de escuchar sobre granadas, robos, sicariato, extorsiones y que no quiere vivir con miedo. Recordó su estadía en prisión y celebró que el Tribunal Constitucional la haya “absuelto”. Aseguró que su respuesta a quienes cuestionan su continuidad en la política es: “soy mujer, soy madre y soy peruana, y por eso no me rindo”. Con una estridente y limitada oratoria sentenció que gobernaría: “primero, como el Chino, con mano dura”, pero también “como gobiernan las mujeres y las madres en sus casas”.

A doña Keiko se le ha sumado un factor en contra. Las marchas de la Generación Z, nutridas o raleadas, han servido para recordar a esa juventud que votará por primera vez quiénes son los villanos de la historia. Cuando uno conversa en la calle con los jóvenes y les pregunta por sus preferencias electorales para este 2026, la mayoría responde: “no tengo idea, pero estoy seguro de que por Keiko no”. Y no es la postura de un sector adormecido o apolítico. La campaña de “Por estos no”, que enumera a los partidos de la actual coalición mafiosa, ha sido viral en las redes sociales y está generando convicciones que pueden confluir en el momento decisivo. ■

Pesadilla de supremacistas

Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos. Su victoria electoral ha sido contundente, para furia de Donald Trump y los republicanos, e incluso para incomodidad del *establishment* demócrata, partido del flamante alcalde. El triunfo de Mamdani es un hecho importante por múltiples razones.

Mamdani representa todo lo que repudia la derecha radical norteamericana y la base dura del presidente Trump: es musulmán practicante, es inmigrante y se define abiertamente como socialista democrático. Mamdani nació en Uganda (África) de padre y madre indios y arribó a Estados Unidos a los siete años. Además, su esposa es de origen sirio.

La victoria de Mamdani ha desatado una histeria colectiva no solo en la derecha radical estadounidense, sino

también entre las derechas radicales latinoamericanas (y trumpistas). Todos los estereotipos, prejuicios y racismos de las derechas cavernarias han salido a flote. Incluso acusan a Mamdani falsamente de ser un comunista y un islamista radical.

Para empezar, el comunismo y el islamismo radical son ideologías políticas antitéticas. El primero es ateo y pretende basar sus postulados en una ciencia (el marxismo-leninismo), mientras que el segundo es teísta, se fundamenta en la religión y en textos sagrados. Por eso a lo largo del siglo XX ambas ideologías han sido enemigas entre sí.

En segundo lugar, Mamdani promueve los derechos de las minorías sexuales, algo incompatible con un islamismo radical. Con toda seguridad, el electo alcalde neoyorquino es más progresista en ese tema que la mayor parte de los conservadores re-

publicanos, por no hablar ya de la base evangélica neopentecostal que apoya al presidente Trump.

En tercer lugar, Mamdani no promueve ningún postulado comunista. Ni siquiera propone expropiaciones de empresas. Sus medidas (control de precios de alquiler de vivienda, construcción de viviendas sociales, transporte público gratuito, guarderías gratuitas, etc.) son en realidad socialdemócratas según estándares europeos.

Mamdani es la pesadilla de los supremacistas blancos, de los nacionalistas cristianos y de los ultraconservadores, no por ser comunista o islamista radical, sino por lo que representa: la diversidad, la inmigración, el mestizaje y todo aquello que odian los que pretenden mantener una ilusoria “pureza” racial, religiosa o de otra índole.

Pero Mamdani es también incómodo para el *establishment* demócrata. Su socialismo democrático pertenece



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

al ala izquierda de ese partido. No por nada ha tenido el abierto respaldo de Bernie Sanders (líder histórico de esa tendencia al interior del Partido Demócrata), quien sigue siendo un faro de decencia y consecuencia en medio de la corrompida política norteamericana.

Mamdani ha comprendido (como antes Sanders) que el Partido Demócrata ha abandonado los asuntos económicos y a la clase trabajadora estadounidense para centrarse casi exclusivamente en temas sociales y en los derechos de las minorías. El triunfo de Mamdani demuestra que se puede luchar por ambas causas y que no es necesario elegir entre una y otra.

Pero Mamdani también es incómodo para la dirigencia demócrata por sus posiciones francas respecto al conflicto palestino-israelí. Frente a la hipocresía y las medias tintas de Joseph Biden o Kamala Harris, Mamdani ha condenado sin ambages los crímenes de Israel y, en particular, del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Mamdani condena el antisemitismo y cree en el derecho de Israel a existir, pero con un añadido importante: no como un Estado que privilegia a un grupo (los judíos) sobre otro grupo (los árabes), sino como un Estado para todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones. En otras palabras, Mamdani es antisionista pero no antisemita, algo muy distinto. ■

Castillismo

El miércoles, antes de dormir, me di cuenta de que había utilizado el término “castillismo” con tres personas distintas ese día. Y no lo hacía en referencia al pasado sino al futuro electoral. Me parece, entonces, que debo ordenar qué rayos estoy diciendo.

Llamaba “castillismo” a un importante grupo de votantes unidos por una sensación de despojo que es más bien una rabia: yo voté por Pedro Castillo, y de pronto lo sacaron y me dieron otra cosa, totalmente distinta. Me despojaron, y eso no lo paso por alto.

Sobre el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 hay tres reacciones: está de acuerdo con él, lo perdona, o no le importa tanto. En todo caso, es mucho más importante lo que vino después: Dina Boluarte y los manifestantes asesinados. La lectura no es cronológica sino retrospectiva. Es decir, no se dice “la torpeza de Castillo nos llevó a Dina

Boluarte”, de atrás hacia delante, sino “Dina Boluarte y el Congreso fueron consecuencia de la traición a Castillo cuando los quiso cerrar”, de adelante hacia atrás. Por eso, los congresistas de izquierda que votaron por su censura, como Ruth Luque, son muy resistidos por ellos, a diferencia de quienes nunca le dieron la espalda u optaron por el silencio estratégico, como Guillermo Bermejo.

El “castillismo” no es entonces una ideología ni un partido, aunque hoy exista uno que pretenda serlo. Lo que los une es la indulgencia con Castillo. El golpe de Estado era necesario, y en todo caso ni siquiera se ejecutó. Castillo no es responsable sino víctima. Y los victimarios fueron el Congreso –ese que tiene 2%– y sus antiguos aliados que le dieron la espalda. En esa dualidad, buscar una sanción a Castillo, o atribuirle una responsabilidad, es ponerse del lado del Congreso que todos desprecian.



CARLOS LEÓN MOYA

Son electores que sienten que se les arrebató un gobierno, y principalmente un líder que los representaba. Son claramente *antiestablishment*, poco institucionales, y mucho menos limeños que, por ejemplo, sus pares del Nuevo Perú. Todo eso los pone en lo que José Luis Rénique llama “la nación radical”, y que en la prensa ven con temor porque no lo entienden.

Por supuesto, el “castillismo” no apareció con él. Viene de antes y ha mutado en estos años. Fue ese voto de primera vuelta por Ollanta Humala el 2006 y el 2011, luego el voto por Verónica Mendoza en el sur en el 2016, el voto abrupto por Castillo el 2021. Del sur andino principalmente, sí, pero no de capital de región, sino “de las provincias de las provincias”. Con varios electores en Lima, sí, pero que quedan muy fuera de lugar. Anaquí Durand tiene el mérito de haberse colocado en ese mismo lugar desde un inicio. Leyó que había un sector del

país que había perdido un líder y tenía una demanda que no era pasajera, y la intentó organizar, pero no puede representarlos porque no es de ellos. Para pasar esa barrera representativa –identitaria– se requiere de un carisma especial y otros factores del azar, como ocurrió con Mendoza el 2016.

Vicente Alanoca es el otro extremo: es como si alguien hubiese creído que por ser de ellos –étnica y geográficamente– podía representarlos. Pero no. Alanoca es tibio. No tiene rabia. No siente despojo de nada. Habla como funcionario de ONG. Criticó las marchas del 2023. Usa terno. Volverlo “castillista” es imposible.

Perú Libre también busca tentar a ese sector, pero no lo logrará nunca. Para ellos, Perú Libre tiene el gorro de traidor (como también cierta izquierda), y además Vladimir Cerrón se ha sentido siempre por encima de Castillo. Se ha referido a él con desdén. Por otra parte, Antauro Humala pudo haber representado al castillismo, pero desperdició esa oportunidad en diciembre del 2022 cuando dijo “la presidenta Boluarte” en la Plaza San Martín, y no pidió disculpas cuando la gente empezó a lanzarle botellas. Insistió en que tenía razón. Desapareció como líder de cualquier radicalismo. Finalmente, Hernando de Soto sueña hace años con representar a ese sector del país, tal como lo hizo Fujimori en 1990. Jamás lo logrará. ■

Memes de exportación

Nos gusta imaginar que allá fuera, en el mundo, nos reconocen por nuestra gastronomía, que somos famosos por el lomo saltado, el ceviche o el ají de gallina. También por Machu Picchu, la ciudadela inca que (¡nos encanta repetirlo!) fue elegida como una de las nuevas siete maravillas del mundo, vía votación por internet. O acaso el recuerdo de alguna selección peruana digna de elogios. Pero la cruda realidad es que se nos conoce más por Tongo y la Tigresa del Oriente. El Perú es un gran exportador de memes.

Desde hace tiempo, la galería de personajes “memeables” se empezó a mezclar con nuestra clase política. Me refiero a César Acuña, el exgobernador y recurrente candidato a la presidencia que cada dos o tres meses aparece con alguna pachotada cantinflesca que se

viraliza en redes sociales, evidenciando la triste ironía de que el señor se hizo rico en el rubro de la educación. También están los videos *cringe* de la señora Keiko Fujimori tratando de generar empatía, o los de Martín Vizcarra, el “bebito fiu fiu”, por no hablar de los exabruptos matonescos del exalcalde de Lima López Aliaga.

Parece que la más reciente estrella peruana de memes de exportación es Dina Boluarte, a quien el famoso canal de YouTube “WatchMojo”, consagrado a los *rankings* de cultura pop y temas absurdos, acaba de dedicarle un video en donde compendia los momentos más ridículos, las frases más insólitas y las metidas de pata de quien fuera la primera presidenta de nuestra historia. El video, con una locución en *off* neutra, se titula “¡Top 10 momentos RIDÍCULOS de Dina Boluarte!” y es el triste recordatorio de que esa mujer se

mantuvo en el poder por casi tres años, siendo el mandato más duradero de la última década en esta republiquetra trágica llamada Perú.

La señora grita “¡Tu mamá!” como respuesta a la población durante el desfile por Fiestas Patrias. En medio de un evento con madres de las ollas comunes, se le ocurrió decir que a las mujeres peruanas les basta con “diez solcitos” para cocinar “sopa, segundo y hasta postrecito”, convirtiéndose de inmediato en una broma cruel. En respuesta al escándalo por sus Rolex, admitió en un mensaje a la nación que se los había “prestado” su “wayki” Oскорima, un gobernador investigado por corrupción. Otro día intentó sin éxito hablar en inglés, desafinó ante unos niños una versión lisérgica de la canción del “Gato Ronrón” y recomendó a todo el país, como gran idea para combatir la delincuencia,



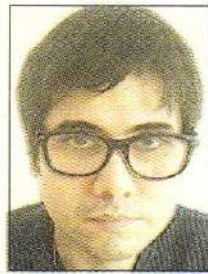
PEDRO CASUSOL

en plena ola de criminalidad, mejor no contestar el teléfono a los extorsionadores.

Eso sin mencionar los viajes frívolos, las cirugías estéticas con las que se planchó la cara, el medio centenar de asesinados durante las protestas, el hecho de haber convertido el cargo de la presidencia de la República en un mero adorno, y que dejó que las mafias copen las instituciones del Estado a cambio de unos cuantos privilegios y un sueldo que jamás hubiera podido ganar en su vida (¡y que se aumentó!). Dina Boluarte no solo es producto de la decadencia política y de una larga tradición de explotar el ridículo, es la encarnación del caos no planificado y la traición que nos persigue, como la parca, desde los tiempos en que Huáscar y Atahualpa se disputaban el sol.

Mientras tanto, aquí seguimos exportando memes. José Jerí, desde que asumió el cargo, cuenta con una versión meme en un *tiktok* llamado Martín Pal que, usando una banda presidencial y un terno, aparece en redes sociales realizando un baile viral llamado el “paso de la máquina”, que consiste en mover frenéticamente la pelvis. Así ha aparecido en todas partes, al punto de que hay quienes piensan que él es el verdadero presidente o que así baila Jerí. Otra forma de llevar el meme al *marketing* político. ■

Silvio, los progresistas y Cristian Castro



JUAN MANUEL ROBLES

Me da mucha emoción ver los videos del reciente concierto de Silvio Rodríguez en Lima, ver cómo al menos tres generaciones siguen cantando de memoria sus temas de ayer y hoy; ver cómo siendo 2025 todavía hay adolescentes que, entre TikTok y memes, se sienten acompañados con *Donde pongo lo hallado* u *Óleo de una mujer sombrero*. Silvio, el viejo Silvio, congregando a miles en su concierto a poco de cumplir 79 años, me hace sentir que hay esperanza en la humanidad; no todo está perdido, me digo. Luego me acuerdo de que allí, sentados en las zonas más cercanas al escenario, hay progresistas de esos que hace años no progresan, ya saben, esos tipos que cantarán *El Necio* a viva voz y al día siguiente saldrán a terruquear al prójimo.

Es feo oír sus voces gastadas pero más feo es ver cómo desafinan sus almas. El propio Silvio sabe que, en Perú y toda Latinoamérica, esos señores y señoras existen, y que en gran parte esos sujetos paran la olla y hacen que las giras sean rentables. Hasta compuso una canción en honor de esa gente, una que dice “desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir / la caravana en harapos de todos los pobres”, pero no es de las más conocidas y los aludidos no se dan cuenta de la burla. Da igual. Allí están, sentados, sin que les afecte —o les pese— ser todo lo contrario a lo que Silvio representa.

Me divierto detectando esa contradicción, que a veces llega a niveles de terror. Como soy silviófilo —todo un *nerd* de Silvio, en serio—, detecto rápidamente a esos granujas. ¿Se acuerdan del ministro Alberto Otárola? Sí, ese mismo, el carnicero, el que avaló todo lo que pasó en Perú desde que Dina Boluarte tomó el poder en diciembre de 2022. Pues resultó ser uno de esos “progresistas”. Cuando murió Nano Guerra García —otro progre tentado por el lado oscuro— lanzó el siguiente tuit: “lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida”. ¡Ampay! *Canción del elegido*, 1978, dedicada a Abel Santamaría, el revolucionario del movimiento 26 de Julio al que la policía de Batista le arrancó los ojos.

O como cuando vi a aquel chico de la universidad que no solo cantaba temas

de Silvio: había aprendido sus canciones en guitarra y tocaba entre clases. Pues en plena campaña presidencial del 2021 lo vi, luego de muchos años, en un video viral: se volvió profesor y les decía a sus alumnos que no voten por Verónica Mendoza porque es una “roja asquerosa”.

Todos nos hemos encontrado con

señores así, y señoras. Esos progresistas que han cambiado totalmente pero aún quieren gozar de esa aura de ser “de avanzada”, personas con “sensibilidad rebelde”. Cuantos Otárolas y Nanitos se sientan en esos auditorios a escuchar fascinados los acordes de *Ojalá*.

No me malinterpreten: no hay nada de malo en ser realista, crecer y mode-



Silvio Rodríguez: tres generaciones escuchándolo.

rarse. Pasar de cantar *Fusil contra fusil* a ser un pequeño burgués que contrata los servicios de Prosegur es algo que puede ocurrir; pasar de cantar “la rabia imperio asesino de niños” a calentar el asiento en alguna dependencia de Usaid es parte de la vida (y de la derrota, porque no hay que olvidar quién perdió la Guerra Fria). ¿Pero ser amante de Silvio y llegar a los cuarenta a terruquear? ¿Hacerles ascos a líderes sociales por rojos? Lo peor, lo alucinante, es seguir yendo a sus conciertos después de la metamorfosis. ¿Por qué lo hacen? Claramente no es para que el trovador les recuerde quiénes fueron.

¿Será parte de la magia de Silvio? Alguna vez le comenté a alguien que el cantautor cubano parecía haber compuesto sus canciones abiertas a interpretaciones adrede, para que la gente pudiera seguir las escuchando sin mojarse ni comprometerse, porque la gente cambia. Ahí está por ejemplo *Por quien merece amor* (¿Te molesta mi amor?), que parece una canción romántica pero en realidad fue compuesta reivindicando el derecho de Cuba de ayudar a la guerrilla de El Salvador a inicios de los ochenta. Es el amor de los pueblos en pie de lucha, idiota. O el

célebre *Unicornio azul*, que parece una alegoría comodín para cualquiera que alguna vez perdió “algo”. Pamplinas: fue escrita en alusión a un hombre cuyo hijo había sido desaparecido luchando en la guerrilla. Lo que en Perú varios de los asistentes al concierto de Silvio llamarían “el hijo de un terruco”.

Sí, me es horrible ver el concierto y saber que también están esos tipos. Gente como Mirko Lauer, que no creo que haya ido a uno últimamente pero que en su juventud fue un revolucionario caserito de la Casa de las Américas en La Habana, en el mismo tiempo en que la institución impulsaba la carrera de Silvio y Pablo Milanés. Pues esta misma semana Mirko Lauer inventó una estúpida teoría de conspiración según la cual el embajador de Cuba —un funcionario cuya identidad es pública— era un espía que trataba de desestabilizar al Perú. Ya antes Lauer había comparado las protestas sociales del 2023 en Puno con el “Estado Islámico”.

Pero bueno, una cosa me hizo olvidar a todos esos zánganos y alegrarme genuinamente. Fue saber que en el concierto de Silvio en Lima estuvo Cristian Castro. La gente se ríe de su presencia, piensan que es algo estafalario, una roca. No lo es. La historia se remonta a inicios de los noventa, cuando Cristian Castro apenas empezaba su carrera. En pleno periodo especial y desaparecido el bloque soviético, Miami ejercía presión para tumbarse a Castro (el barbudo). Verónica Castro, la madre de Cristian y que entonces conducía *La Movida*, se declaró admiradora de Silvio; no solo viajó a Cuba sino que invitó al cantante a su *show* en México. Por hacerlo, fue hostilizada por el *star-system* de Miami (por esos años, Andy Montañez fue “cancelado” por abrazar al trovador cubano). En el set de televisión de Verónica Castro, Silvio cantó algunos de sus temas más célebres acompañado por primera vez con una orquesta de jazz afrocubano de lujo: Diákara. Fue hermoso.

Así comenzó esa conexión, por la valentía de una actriz que no tenía nada que ganar (de hecho, mostrar amistad con Cuba en esos años era igual a tener represalias de los poderosos Estefan) pero sí principios que defender, y que se comió el pleito. La noche del concierto en Lima, cuando finalmente llegó al camerino y pudo ver a Silvio, Cristian Castro lloró. Esa valentía original, de una estirpe pop aparentemente frívola, de telenovelas y videoclips, se me hace mucho más digna que la de esos progresistas peruanos, presuntos intelectuales, sentados en zona Platinum, que mencionan a Silvio en su educación sentimental y cantan de memoria pero no dicen ni dirán media palabra cuando acusan de terrorismo, sin pruebas, a compañeros políticos, solo por no ganarse líos, pensando que a ellos no les tocará.

SÍ, ME ES HORRIBLE VER EL CONCIERTO Y SABER QUE TAMBIÉN ESTÁN ESOS TIPOS

Destruyendo la Casa Blanca



AMY GOODMAN*

En la película de terror de 1979 "Cuando llama un extraño", la policía alerta a una niñera que está recibiendo llamadas telefónicas amenazantes y le dice: "Hemos rastreado la llamada. Viene del interior de la casa". En Washington D.C., la realidad se asemeja a la ficción, ya que la propia Casa Blanca está siendo atacada y, al igual que en la película, el perpetrador del ataque se encuentra dentro del edificio. El presidente Donald Trump ordenó abruptamente la demolición de toda el ala este de la Casa Blanca, un edificio que fue construido por trabajadores esclavizados durante la década de 1790 en un terreno designado por George Washington y que pertenece al pueblo de Estados Unidos, no a Trump. Si bien la Casa Blanca es considerada la "Casa del Pueblo", aparentemente no hay forma de evitar que Trump utilice una bola de demolición para destruirla.

La demolición del ala este del edificio ofrece una metáfora perfecta de lo que Trump está haciendo con los pilares institucionales de nuestra democracia: derribarlos con arrogancia autoritaria, sin responder ante nadie, al tiempo que erige otro estridente monumento a su persona.

La demolición dará lugar a la construcción de un enorme salón de baile de más de 8,300 metros cuadrados —más de una vez y media el tamaño de un campo de fútbol americano—, del que Trump se jacta que tendrá una capacidad para 1,000 personas. La imagen digital del salón de baile de Trump muestra una sala cavernosa con adornos dorados que revelan la obsesión del presidente por el recubrimiento en oro, un estilo que el escritor Garrett Graff ha comparado con el de la "arquitectura del Kremlin".

En julio, después de que la Casa Blanca anunciara planes para construir el salón de baile, Trump dijo:

"La remodelación no afectará al edificio actual. Estará cerca, pero no lo tocará, y respetará totalmente el edificio existente, del que soy el mayor admirador. Es mi favorito. Es mi lugar favorito. Me encanta".

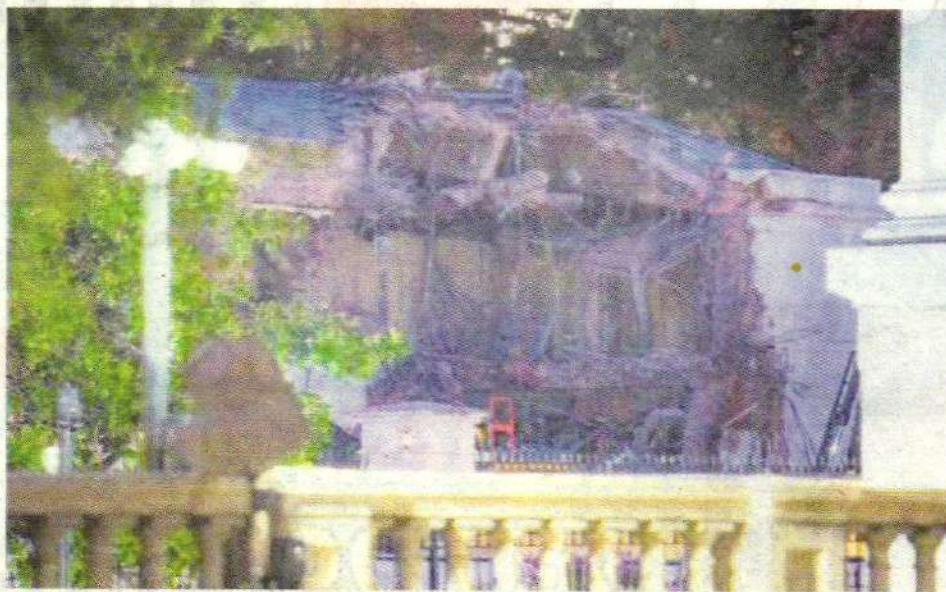
Trump ha mentido muchas veces, y esta no es una excepción. Lejos de quedar intacta, el ala este de la Casa Blanca ha sido completamente demolida. En cuanto a su amor por el edificio histórico, un compañero de golf de Trump le dijo en 2017 a la revista "Golf Magazine" que, mientras jugaban

al golf, el mandatario estadounidense había dicho: "Esa Casa Blanca es una auténtica pocilga".

El mandatario estadounidense ha ignorado por completo los precedentes y el proceso legal para realizar cambios tan drásticos en la Casa Blanca. En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que actualmente está controlada por personas designadas por Trump, la organización sin fines de lucro Fondo Nacional para la Preservación Histórica escribió: "Estamos sumamente preocupados de que el tamaño y la altura de la nueva

construcción propuesta, cuya superficie es de más de 8,300 metros cuadrados, resulten excesivos en relación con la propia Casa Blanca, así como la posibilidad de que estos también puedan alterar de forma permanente el diseño clásico cuidadosamente equilibrado del edificio". Tal como lo leyeron, el salón de baile es mucho más grande que la propia Casa Blanca.

Trump ya ha realizado otros cambios en el edificio histórico, incluida la pavimentación del Jardín de las Rosas, que fue concebido por la primera dama Jacqueline Kennedy.



La demolición del ala este: todo un símbolo del voluntarismo monárquico de Trump.

Asimismo, el mandatario estadounidense también reveló que planea construir un arco monumental, inspirado en el Arco del Triunfo de Francia, en la Explanada Nacional de Washington D.C. para el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio de 2026. Cuando la cadena CBS le preguntó para quién era el arco, Trump respondió: "Para mí". La gente ha empezado a llamarlo el "Arco de Trump".

En respuesta a las crecientes críticas por la demolición del ala este de la Casa Blanca, el Gobierno estadounidense emitió un comunicado que, en parte, dice: "La izquierda desquiciada y los paladines de las noticias falsas aliados a ella se rasgan las vestiduras por el visionario proyecto de construcción de un gran salón de baile del presidente Donald J. Trump, cuya financiación proviene de capitales privados".

Esa supuesta financiación privada merece ser destacada. El costo estimado del salón de baile se ha incrementado de 200 millones de dólares a más de 300 millones de dólares, y su

construcción ci-
uso de una can-
recursos y perso-
son financiadas por los co-
tes, como el Servicio Secreto.

Esto se produce en medio de la paralización de los servicios del Gobierno federal, que ha provocado la suspensión y el despido de miles de trabajadores federales, y cuando los impactos draconianos del llamado "gran y hermoso proyecto de ley" presupuestario de Trump están afectando a millones de estadounidenses, ya sea por el aumento de las primas de los seguros médicos o por la eliminación de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, entre otras cosas.

Según se informa, entre las grandes empresas que financian la construcción del salón de baile se encuentran los gigantes tecnológicos Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon y Palantir; los contratistas militares Lockheed Martin y Booz Allen; la plataforma de criptomonedas Coinbase; la compañía de medios Comcast; la empresa de telecomunicaciones T-Mobile y el productor de cigarrillos Altria.

Esta generosidad empresarial claramente tiene como finalidad ganarse el favor de Trump, quien se maneja de manera abiertamente transaccional, al tiempo que busca ejercer un control autoritario sin precedentes.

El Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, ha abdicado por completo de su función de supervisión, y los tribunales federales, que intentan ponerle un freno a la ambición autoritaria de Trump, en definitiva están subordinados a la Corte Suprema de Estados Unidos, que cuenta con tres jueces designados por el presidente y una mayoría conservadora de seis votos contra tres que le otorga a Trump una y otra vez más poder al emitir fallos favorables a él.

Es por eso que el presidente Trump y quienes impulsan su conducta quedaron tan abiertamente perturbados por las protestas masivas que se llevaron a cabo en todo Estados Unidos, las cuales fueron organizadas bajo el lema "Día sin Reyes". Más de siete millones de personas, desde Maine hasta Alaska y Hawái, tanto en estados tradicionalmente republicanos, como en estados tradicionalmente demócratas, salieron a las calles para rechazar el autoritario proyecto de concentración de poder de Trump. Con increíble creatividad y de manera absolutamente pacífica y no violenta, los manifestantes dijeron básicamente lo que los autores de la Constitución de Estados Unidos escribieron unos pocos años antes de que los trabajadores esclavizados colocaran la piedra angular de la Casa Blanca: "En Estados Unidos, no hay reyes ni monarcas". ■

*Editora de Democracy Now.

**CUANDO LA CADENA CBS
LE PREGUNTÓ PARA QUIÉN
ERA EL ARCO, TRUMP
RESPONDIÓ: "PARA MÍ"**

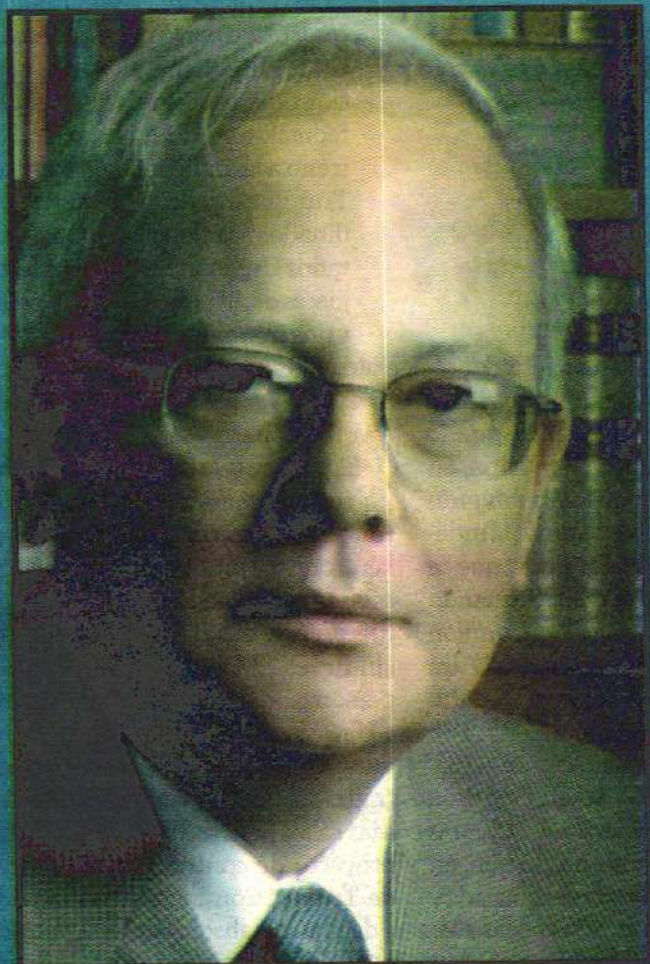
HILDEBRANDT

en sus trece

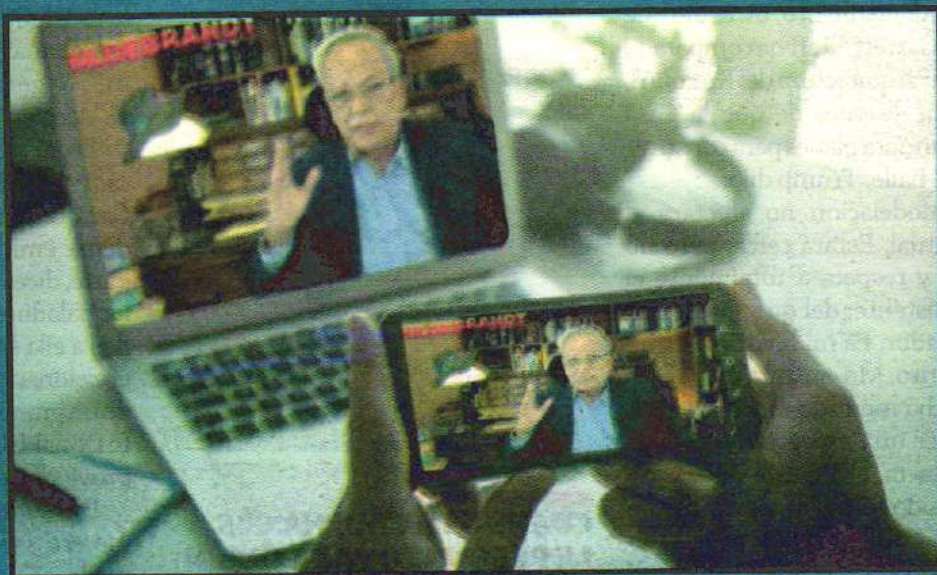
¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las 9 DE LA NOCHE, siga
en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial

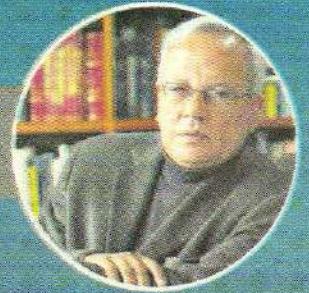


Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
237,291 suscriptores
y ha sumado
34'303,671 vistas



TOP - SEMANAL PROGRAMAS STREAMING MAS VISTOS

SEMANA: DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE



HILDEBRANDT
EN SUS TRECE

1

201,123

HABLA GOOD

2

119,133



SIN GUIÓN

3

119,095



BRUTALIDAD
POLÍTICA

4

112,090



SOMOS LO
QUE SOMOS

5

109,857



DUKE

6

89,570



ROSA MARIA
CIFUENTES

7

76,736



GUAPOTES

8

59,368



ESB_DOTA2

9

58,195



EDICIÓN
ESPECIAL

10

49,730



Información tomada de TOP SEMANAL PROGRAMAS STREAMING MÁS VISTOS
DEL LUNES 03 AL VIERNES 07 DE OCTUBRE en la plataforma YOUTUBE PERÚ.

Los operadores de la Línea 100 trabajan en turnos de seis horas, las 24 horas del día, los siete días de la semana.



La línea roja

► Crónica de lo que se vive y sufre en la Central de llamadas 100 del Ministerio de la Mujer. Allí, unos minutos pueden salvar una vida

ALONSO ZAMBRANO
FOTOS JOEL DURÁN

Las voces se mezclan en el ambiente. El murmullo es continuo e intenso. De repente una voz sobresale: "Manténgase en línea. Ya llamamos a la policía. Respire". En las instalaciones de la Línea 100 cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Antes de que el reloj marque las 12 del día, un operador atiende a una mujer que al otro lado de la línea telefónica describe la golpiza que acaba de recibir de su

expareja. A su costado, una operadora intenta calmar a una madre que llora sin parar y que no logra contar por qué. Unas mesas más allá una telefonista marca una y otra vez el número de la comisaría de Tambopata, en Madre de Dios, pero nadie contesta. Requiere que vayan a asistir a una mujer que ha vuelto a recibir una tunda de su expareja.

El operador más tarde escribirá un informe. El texto es una descripción del horror:

"Hoy el agresor entró a su casa de manera forzada. La ahorcó, rompió una botella y le cortó las pantorrillas.

Luego comenzó a llevarse el dinero que había recaudado de las ventas de cerveza. Los hechos ocurrieron frente a sus dos hijas menores. Ellas lloraron desesperadas y lograron escapar. La señora indica que estos episodios se repiten desde hace más de un año, de tres a cuatro veces por semana. El agresor es su exconviviente. Mujer víctima de intento de feminicidio. Se coordinó con patrullero en Madre de Dios. Riesgo: severo", dice el texto.

Otra operadora, al terminar la llamada, hace el informe correspondiente y escribe: "Informante anónimo refiere que un niño de 8 años está encerrado con candado. Localidad: Ayacucho. El niño está desaseado. Lo castigan con golpes. Grita para salir".

La Línea 100, un programa del Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables, atiende llamadas de personas que sufren violencia familiar, sexual o de género. Su centro de operaciones está en el piso 11 de un edificio ubicado en el jirón Cusco, en el centro de Lima. Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y cuenta con un equipo de entre 30 y 50 operadores por turnos de seis horas. Y no se dan abasto.

La centralita funciona en una oficina amplia. Tiene ventanas con vistas, pero la mayoría de las cortinas de plástico opaco están a medio bajar. El suelo y el techo son blancos. La luz blanca y fría de los fluorescentes termina por darle al ambiente un aspecto de sala de hospital.

Los operadores visten chalecos rojos y tienen un audífono con micro que, a pesar de los cientos de ki-

lómetros que los puedan separar de las víctimas, los convierte en testigos auditivos del dolor y del miedo. Frente a ellos, las pantallas de las computadoras parpadean con registros, reportes y números de contactos de emergencia. No usan teléfonos tradicionales. Todas las llamadas pasan a través de un programa informático que suprime ruidos externos que dificulten la comunicación e identifica automáticamente la provincia desde donde se comunica el denunciante.

La única forma de contacto con las víctimas es por vía telefónica. Por protocolo, cualquier interacción presencial está prohibida.

En los últimos once meses la Línea 100 ha recibido 120 mil reportes por violencia familiar o de género. Han sido casi 11 mil denuncias



al mes. Más de 360 al día. El 81,4% corresponde a mujeres y el 18,6% a hombres. Los tipos de violencia más frecuentes son psicológica (41,7%), física (36,9%) y sexual (18,9%).

"Tenemos un protocolo vigente desde junio de 2021 que clasifica los casos según el nivel de riesgo: leve, moderado o severo. Si alguien llama mientras está siendo agredida, el operador puede realizar una llamada compartida con la comisaría o coordinar directamente con la policía. En casos de flagrancia, la prioridad es proteger la vida", explica Jacqueline Giraldo, coordinadora de la Línea 100.

Yul Carrasco, psicólogo de profesión, trabaja en la Línea 100 desde hace dos años. Admite que hay historias que lo han marcado profundamente. Él es uno



Ximena Vidal, operadora de la Línea 100, recuerda un caso que la impactó: "Una mujer corría mientras hablaba conmigo. Gritaba: '¡Él me va a matar!'! Decía que su pareja la perseguía con una botella rota".



"En casos de flagrancia, la prioridad es proteger la vida de la denunciante", dice Jacqueline Giraldo, coordinadora de la Línea 100.



"Más allá de la preparación profesional, no deja de afectarnos escuchar tanto dolor", dice Yul Carrasco, psicólogo y operador del servicio.



"Lamentablemente muchas mujeres quechuahablantes suelen llamar cuando la violencia ya es de larga data. No llaman cuando empiezan las agresiones sino cuando ya es algo grave, muchas veces cuando su vida corre peligro inminente", dice Delia Sulca, operadora quechuahablante.

de los cuatro operadores que hablan quechua.

"Más allá de la preparación profesional, no deja de afectarnos escuchar tanto dolor. Siempre hay un choque emocional, sobre todo cuando se trata de abusos sexuales o maltrato a menores. Cuando eso pasa, entre compañeros conversamos, salimos un momento, respiramos y volvemos a atender", cuenta.

Uno de los casos que más lo golpeó fue el de una mujer quechuahablante que llamó desde Ayacucho mientras escapaba de su agresor.

"Su esposo la había pateado con botas de punta de acero. Le dejó el hueso expuesto. Ella llamó pre-

viamente a la policía, pero no la entendían porque solo hablaba quechua. Cuando yo recibí la llamada, me dijo que estaba tirada en el suelo, sangrando, sin poder caminar. Que venía siendo maltratada por más de veinte años y nunca se había atrevido a denunciar", recuerda Carrasco, quien la orientó para presentar su denuncia.

Otro caso que lo afectó fue el de una madre que llamó para denunciar que su propio hijo, de 12 años, había abusado de su hija de 6.

"Ella me dijo: 'El agresor ha sido mi hijo'. No sabía qué hacer, si denunciarlo o no. Era una mujer separada que se sentía culpable. Uno

no espera que el agresor sea otro niño", señala.

Ximena Vidal, también psicóloga, se unió a la Línea 100 en diciembre de 2023. Para ella los casos más difíciles son aquellos en los que las víctimas llaman cuando su vida corre peligro.

"Una mujer corría mientras hablaba conmigo. Gritaba: '¡Él me va a matar!'! Decía que su pareja la perseguía con una botella rota. Hablamos por más de dos horas mientras coordinaba con la policía, que estaba a una hora y media del lugar. La llamada se cortó y no supe por horas si estaba viva. Finalmente, la policía la encontró. Días después, ella regresó con su agresor.

Fue decepcionante", recuerda.

Vidal dice que llevaba unos pocos días trabajando en la central telefónica cuando recibió una de las llamadas que más la han conmovido. "Era un padre que denunciaba que la madre de su hija, una niña de 7 u 8 años, la ofrecía a otras personas a cambio de dinero o alcohol. Ese caso me impactó porque yo también soy madre y mi hija tenía la misma edad. No somos inmunes al dolor que viven las personas que atendemos", dice.

Delia Sulca Fernández lleva cuatro años y medio trabajando en la Línea 100. Maneja dos tipos de variantes de quechua: el chanka y el collao. "Lamentablemente muchas mujeres quechuahablantes suelen llamar cuando la violencia ya es de larga data. Es decir, no llaman cuando empiezan las agresiones sino cuando ya es algo grave, muchas veces cuando su vida corre peligro inminente", dice.

Entre los reportes de emergencia y los intentos desesperados por salvar una vida, también hay llamadas malintencionadas. En lo que va del año la central ha recibido 67 mil llamadas que incluyen insultos, burlas y amenazas a los operadores. Es bastante habitual que el origen de este tipo de llamadas sea el centro de reclusión juvenil Maranguita.

"Esas llamadas saturan el servicio e impiden que otras personas en riesgo accedan a ayuda", dice Jacqueline Giraldo, coordinadora de la Línea 100.

"En esas llamadas nos insultan, gritan o amenazan. A mí incluso me han dicho: 'sé dónde queda la Línea 100, te voy a buscar', dice la operadora Ximena Vidal.

Una operadora está terminando uno de sus últimos reportes de la jornada. Mientras tipea, lee con atención el texto que va apareciendo en la pantalla: "Informante indica que una joven vive encerrada en su casa desde hace varios años. Su madre y hermanos no le permiten salir ni socializar. Se escuchan gritos, llantos y pedidos de ayuda. Hoy la adolescente sufrió una fuerte caída desde un segundo piso en circunstancias extrañas". ■

Piratas en el Caribe

► Donald Trump es también patrón de lanchas. Lo que está haciendo con embarcaciones menores supuestamente comprometidas con el narcotráfico viola todas las leyes del derecho internacional y crea un precedente nefasto en lo que Marco Rubio ha llamado "su hemisferio"

ELIA Y. DIZ

Donald Trump ha desplegado artillería pesada en el Caribe. Ocho buques de guerra, un submarino nuclear, navíos guardacostas, embarcaciones de ataque anfibio y 13,000 soldados estadounidenses merodean la costa de Venezuela. El portaaviones más grande del mundo se sumó a la escuadra esta semana, cargado con un reactor nuclear, 70 misiles Tomahawk y 4,500 marineros a bordo.

Las ejecuciones extrajudiciales en aguas caribeñas empezaron el 2 de septiembre pasado. "¡CUIDADITO!", tuiteó Donald Trump, tras el asesinato de 11 personas que navegaban en una lancha. Desde entonces, el ejército de Estados Unidos ha matado a otras 80 personas con el mismo *modus operandi*: drones bomba que revientan lanchas.

Dice el inquilino de la Casa Blanca que Estados Unidos está a la caza de "narcoterroristas" que operan bajo el control de Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Dice además que Estados Unidos está en "un conflicto armado" con los cárteles. Y dice también que goza de la misma "autoridad legal" que tuvo George W. Bush en el 2001, cuando declaró la "guerra al terrorismo".

"Estos ataques -y su creciente costo humano- son inaceptables", denunció a finales de octubre el alto

comisionado de la ONU Volker Türk. "Estados Unidos debe cesar tales ataques y tomar las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales (...), independientemente de las conductas delictivas imputadas", subrayó Türk.

Entre el 2 de septiembre y el 13 de noviembre, el ejército estadounidense ha reportado 20 ataques contra embarcaciones a las que, sin aportar una sola prueba, calificó de "terroristas". Según Naciones Unidas, hasta el 31 de octubre "ninguna de las personas a bordo parecía representar una amenaza inminente". Los deudos de las víctimas han empezado a hablar.

"Salió a faenar y nunca regresó", explica la familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano de Santa Marta asesinado en septiembre pasado.

La última vez que lo vieron, el hombre de 40 años salía a trabajar a una zona "donde había buen pescado", dijeron sus familiares a Agence France-Presse (AFP). El 15 de septiembre Trump compartió en su red social privada un video de la lancha de Alejandro Carranza siendo destruida por un misil.

Según reportan AFP e Infobae, en el 2015 Carranza confesó haber participado en el robo de 264 armas de fuego incautadas por la policía. La fiscalía de Santa Marta no se ha pronunciado, pero el presidente colombiano denuncia que la

El presidente estadounidense Donald Trump al concluir una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, el 11 de noviembre de 2025. (FOTO: Brendan Smialowski)



El portaaviones USS Gerald Ford es el más grande del mundo y Trump lo ha aparcado en el Caribe latinoamericano. (FOTO: ANP)



embarcación atacada "no tenía vínculos en el narcotráfico y su actividad diaria era pescar". "Estaba a la deriva y con la señal de avería puesta", dijo Gustavo Petro tras el ataque.

La directora adjunta de investigación para las Amé-

ricas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, subraya que "no existe base legal alguna para las acciones de Estados Unidos".

"Si estas personas estaban cometiendo delitos, tendrían que haber sido detenidas y procesadas ante

las autoridades", explica la abogada entrevistada para esta nota.

En Washington también han sonado las alarmas. La Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) advirtió el 7 de noviembre que las "implicaciones de las



Dos personas murieron en un ataque estadounidense contra una embarcación en el mar del Caribe el 16 de octubre. Andrés Fernando Tufiño, liberado en Ecuador el 20 de octubre de 2025, es uno de los sobrevivientes. Nadie lo ha acusado de pertenecer a un cártel del narcotráfico. (FOTO: Ministerio del interior de Ecuador)

Soles, quieren desestabilizar Estados Unidos introduciendo cocaína. Y este lunes la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia decretó que los ataques son en defensa propia y por ende "legítimos".

"Los ataques contra el régimen de Maduro reflejarían el objetivo de cambio de régimen y quizás una agenda más amplia de intimidación a otros gobiernos", advierte el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington.

El corredor caribeño en el que se concentra la embestida de Trump no es una ruta importante para las organizaciones del narcotráfico desde los años 90. La mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de la región andina e ingresa a la tierra del Tío Sam por la frontera sur. A ello se suma que la crisis de adicción que azota Estados Unidos es ocasionada por opioides, principalmente fabricados en México con químicos chinos, señala un informe elaborado por el Departamento de Justicia en colaboración con la DEA.

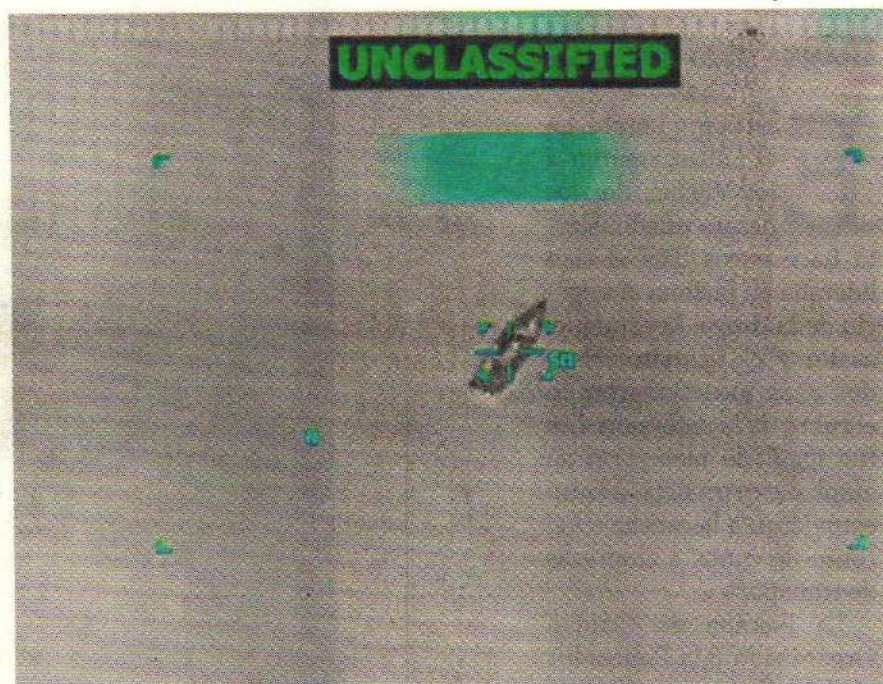
"Hasta los medios de comunicación estadouni-

denses han expuesto la incongruencia. Se tienen que centrar en su propia crisis de salud pública causada por el fentanilo", dice Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional.

Medios de comunicación como *The Atlantic* y *The Guardian* señalan que en realidad a Trump lo que le interesa es derrocar a Maduro. Lo de las drogas es un pretexto que tiene "buena prensa".

"El presidente aún no ha tomado una decisión, pero sus asesores están barajando una serie de objetivos para intentar justificar el derrocamiento de Nicolás Maduro", publicó *The New York Times* a principios de noviembre.

"Para Amnistía Internacional es muy difícil determinar cuál es la motivación detrás de estos ataques. Pero no importa el revestimiento que se les dé, porque son ilegales", dice Ballesta. Y añade: "(...) Una guerra civil es uno de los escenarios que más nos preocupa. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿Dónde está la protección ante autoridades crueles que han cometido violaciones sistemáticas y masivas contra los derechos humanos?".



Momento del ataque homicida a una embarcación el 14 de octubre. Ya van 80 muertes. (FOTO: X vía EFE)



El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot; su homóloga canadiense, Anita Anand, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete, en Ontario, Canadá. (FOTO: Mandel Ngan/AP)

En la cuarta cumbre entre las Comunidades de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, celebrada en Santa Marta el pasado domingo 9 de noviembre, Gustavo Petro denunció la bravuconería de Trump. "Los mismos misiles que caen en Gaza caen aquí, en el Caribe, sobre personas pobres", dijo el presidente colombiano.

"La amenaza de una embestida militar vuelve a ser cotidiana para América Latina y el Caribe. Viejas maniobras y retóricas están siendo recicladas para justificar operaciones ilegales", denunció el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desde Santa Marta.

A las denuncias internacionales también se ha sumado Gran Bretaña, que ha cesado de compartir inteligencia sobre el Caribe con Estados Unidos citando las ejecuciones extrajudiciales.

Y el ministro del exterior francés Jean-Noël Barrot dijo esta semana, durante la cumbre G-7 en Canadá, que las "operaciones" en el Caribe "violan el derecho internacional".

Al Secretario de Estado Marco Rubio le sentó mal la reprimenda de sus socios del viejo continente. Y les respondió a su estilo: "La Unión Europea no tiene potestad para determinar qué es el derecho internacional. Y desde luego tampoco tienen potestad para determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional".

"Estamos ante una encrucijada del funcionamiento de los mecanismos internacionales de protección (...) —dice Valentina Ballesta—. La humanidad no puede permitir lo que está pasando en Gaza, en Sudán, ni el desarrollo de estos eventos en el Caribe". ■

acciones de Estados Unidos van mucho más allá de Venezuela". El temor es que el conflicto pueda escalar y arrastrar a Colombia o México.

Trump argumenta que mafias, entre ellos el Tren de Aragua y el Cártel de los

En el jirón Loreto, en el Callao, mentar a los Vílchez Berríos desata miedo. Hasta hace pocos días el clan lideraba en la zona el negocio de la droga, la estafa, el asalto y el sicariato. Hace dos años incursionaron en el rubro de la extorsión. Les fue igual de bien. Con su amplia experiencia pronto estuvieron a la cabeza en el cobro de cupos a empresas de transporte.

La Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía los vigilaba desde julio de este año. El pasado 7 de noviembre seis integrantes de la banda fueron detenidos.

Los Vílchez viven en una casa de tres pisos escondida al fondo de un callejón del jirón Loreto. "Esa casa ha sido construida con las lágrimas de las personas", comenta un vecino. Se refiere a las familias afectadas por la adicción a las drogas de sus hijos.

Los vecinos advierten que toda la cuadra está bajo la estricta vigilancia de la familia. La Policía lo confirma.

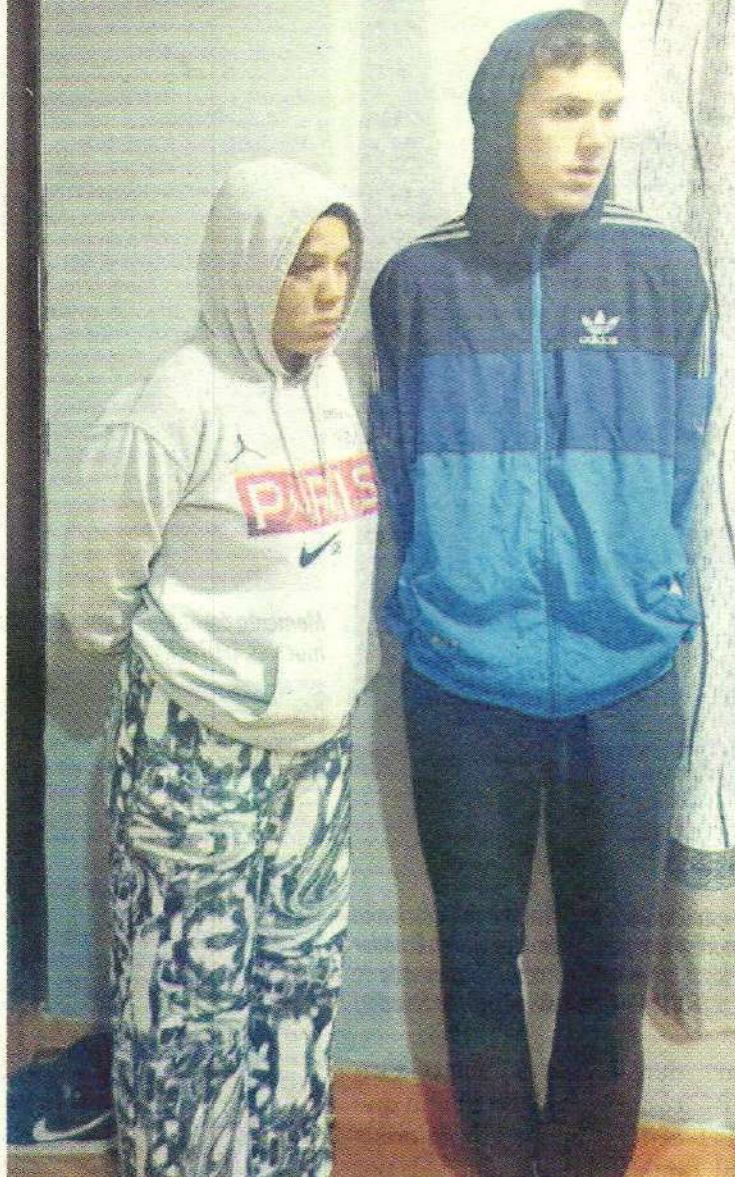
"Ese fue uno de los principales obstáculos, tienen cámaras ocultas alrededor de su casa y en toda la cuadra. Incautamos el disco duro de más de diez cámaras de seguridad", comenta el coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Sur. Para desarticular la banda no se convocó a la Policía del Callao. Querían evitar filtraciones.

La matriarca de la familia es Rossana Vílchez Alcalde, de 58 años.

Hace años, una persona la denunció en Amazonas por estafa. Según el reporte policial, la denunciante recibió un mensaje que le comunicaba que era ganadora de 50 mil soles y un auto Toyota. Le pidieron depositar S/ 680 por "gastos administrativos" a una cuenta a nombre de Rossana Vílchez.

Acumuló otras 16 denuncias similares en Huaraz, Cusco, Lambayeque, Ayacucho, Moquegua y Áncash. A cada víctima le solicitaba entre S/ 400 y S/ 1,200 para hacerse de un premio.

El marido de Rossana, Ruddy Berríos, fue uno de los ladrones más conocidos en el barrio.



Detención de Andrea García Caballero y Kelwin Rodríguez Heredia, recaudadores del dinero de las extorsiones.



La Fiscalía incautó las libretas donde se registraban los cobros de cupos.

Banda tamaño familiar

► Caen los exitosos extorsionadores de empresas de transporte en la ruta Lima-Callao. Recaudaban 3,600 soles al día. Según algunos choferes, sólo ha habido un cambio de nombres. "Nos siguen amenazando y tenemos que pagar a otras personas", dice uno de ellos

Vílchez y Berríos tuvieron cinco hijos: Junior (41), Johan (39), Milagros (35), Nathaly (33) y Ruddy (32). Salvo el último, que se mudó

al extranjero, todos han tenido líos con la justicia.

El apellido Vílchez empezó a sonar en los noticieros en el 2010. En diciembre de



Coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de Lima Sur: "(Los Vílchez) tienen cámaras ocultas alrededor de su casa y en toda la cuadra. Incautamos el disco duro de más de diez cámaras de seguridad".



Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, señala que el clan está involucrado en por lo menos tres asesinatos ocurridos este año.

aquel año Junior Berríos Vílchez fue detenido por robo agravado. Se había especializado en asaltar farmacias junto a su banda. La policía

la bautizó como "Los Boticarios". En uno de esos atracos mataron a una persona. Por ese crimen el mayor de los hermanos sigue preso.

En octubre del 2017 Milagros Berríos Vilchez, la segunda de los cinco hijos, fue asesinada en una fiesta de cumpleaños. Días antes su expareja –preso por sicariato y extorsión– había amenazado a la familia.

Los vecinos del jirón Loreto aseguran que el más peligroso de los hermanos es Johan Steven Berríos Vilchez, alias Johan. Su propio padre lo denunció en diciembre del 2023.

El parte policial de aquella denuncia dice: “Ha sido amenazado de muerte por parte de su hijo [...] le dijo: ‘te voy a meter bala a punto cuete’, su hijo tiene dos meses en libertad, cumplió una condena por homicidio”.

Johan Berríos integró “Los Sanguinarios”, una banda de sicarios a la que la policía le atribuye siete asesinatos.

Desde que recuperó la libertad, Johan Berríos se ha dedicado al negocio de las extorsiones junto a sus hermanos. Al mando de la “empresa” está la madre. La banda operaba con el nombre de “Perú Unido”.

Las víctimas del clan eran Consorcio Vía Colonial, Etmarsa, Etsabepsa, Liventur y Acor Sac y todos los informales de la ruta Lima-Callao. Tres testigos en reserva y el seguimiento policial permitieron determinar el rol que cumplía cada miembro y desentrañar la ruta del dinero.

Cada una de las cinco empresas de transporte mencionadas tiene en promedio una flota de 90 vehículos. Cada chofer debía pagar 8 soles diarios. Con 540 vehículos, la familia recaudaba en promedio S/ 3,600 diarios.

Los 8 soles debían ser transferidos a través de Yape a Yeuris Rodríguez Díaz o a Alejandra Rosalía Merengote Granado. Estas dos mujeres prestaban sus cuentas a cambio de una comisión.

El dinero recaudado era transferido a los “cobradores”, quienes gestionaban los grupos de WhatsApp donde los choferes debían enviar los comprobantes de pago.

Cada empresa de transporte tenía asignado un “cobrador”. Cuando los conductores se negaban a yapear, los cobradores iban hasta sus paraderos a amenazarlos. Los puntos más



*Rossana Vilchez
Alcalde, alias
“Roxana”,
matriarca
del clan y
administradora
del dinero de las
extorsiones.*



*Nathaly Berríos
Vilchez recibía
la cuota de los
recaudadores
cada día.*

frecuentes para el amedrentamiento eran Plaza Dos de Mayo (Breña), el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela (Callao) y Paradero Teléfono (Ventanilla).

Durante las labores de seguimiento, los agentes registraron a Kelwin Rodríguez Heredias, alias “Cachorro”, mientras intimidaba a un

chofer.

Los recaudadores entregaban el dinero a Nathaly Berríos. Ella trabajó durante años con su pareja, Jackson Gámez Navarro, hasta que el 1 de octubre de este año fue asesinado.

“Nathaly y su pareja trabajaron como cobradores y así se metieron a los grupos

de WhatsApp de los choferes y consiguieron nuestros números”, dice un chofer de la empresa Consorcio Vial.

Nathaly Berríos le entregaba el dinero a su madre, quien operaba en el búnker del jirón Loreto. Desde allí llevaba las cuentas del clan, supervisaba los cobros, custodiaba las armas y dirigía la

venta de drogas junto a su hermana Elizabeth Vilchez.

De acuerdo con los testigos protegidos, Johan Berríos Vilchez organizaba a los cobradores y controlaba desde la sombra los grupos de WhatsApp desde donde se enviaban las amenazas.

Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, señala que el clan está involucrado en por lo menos tres asesinatos ocurridos este año.

La madrugada del 7 de noviembre la Fiscalía allanó diez viviendas, entre ellas la del Pasaje Loreto. Detuvieron a Rossana Vilchez, Elizabeth Vilchez, Nathaly Berríos y a los cobradores Kelwin Rodríguez, Herbi Puescas y Andrea García. Hallaron municiones, explosivos y las libretas donde llevaban los registros de las extorsiones. Johan Berríos logró huir.

Tres conductores víctimas de la banda aseguran que tras la caída de la banda todo sigue igual. Uno de ellos, con once años en Consorcio Vía Colonial, dio su testimonio para esta publicación.

“Son cuatro bandas diferentes las que nos cobran cupos, a cada una se le yapea 8 soles diario. Todo empezó con la banda de Nathaly Berríos, pero su propia gente aprendió el negocio, se separaron y ahora están enfrentados –relata–. Nos siguen amenazando, nos dicen que nos van a matar”.

Uno de los últimos mensajes que han recibido tiene el tono de un comunicado: “Se les hace de conocimiento a todos los choferes de la Ruta Colonial que la era de la extorsión encabezada por Johan Berríos Vilchez ya se acabó”. Lo firma la banda “Callao Unido”.

Dice este chofer que lo único distinto tras el operativo es que la cuenta de Yeuris Rodríguez ya no está disponible. Pero si no quieren terminar con una bala en la cabeza, deben yapear a otra cuenta.

“No usar más (la cuenta) de Yeuris, el que haga su pago ahí deberá pagar nuevamente”, dice el mensaje. El chofer saca su celular y yapea 8 soles a la cuenta de Alejandra Merengote. Es la nueva receptora. ■

la Diviac designado para trabajar con el Equipo de FISCAL contra la Corrupción del Poder (Eficcop). En enero de este año el entonces presidente de la junta de cambios de la PNP, Óscar Arriola, ordenó que 133 oficiales de la Diviac especializados en investigación fueran derivados a otras áreas de la Policía como la unidad de Salvataje, Servicios Especiales y Comisarias. Sólo tres oficiales sobrevivieron a la purga.

"Este año los equipos de la Diviac se han visto reducidos en términos de personal. Uno de los equipos que ve temas de corrupción de funcionarios pasó de 35 agentes a diez", señala "Beto", un policía en actividad que sigue en la Diviac.

El actual jefe de la unidad, Eric Ángeles, es un oficial que ha trabajado bajo las órdenes de Arriola. Cualquier decisión debe contar con su visto bueno. "Antes cada equipo de corrupción, minería ilegal, trata de personas y otras secciones desarrollaba sus investigaciones con independencia", señala.

El agente afirma que Ángeles ha derivado al menos unos veinte casos de la Diviac hacia la Dirección contra la Corrupción (Dirccor) de la PNP, a pesar de que esta unidad no tiene buena reputación dentro de la

institución.

En el 2017, cuando la Diviac estaba investigando a "Los Intocables Ediles", una banda de corruptos incrustada en la Municipalidad de La Victoria, en una interceptación telefónica captaron al suboficial Pedro Guevara Slee conversando con un integrante de la banda. Le aseguraba que todo estaba amañado en la Dirccor. "Ya está resuelto el problema, ya se habló con el uno, de anticorrupción. Vas a ir, pero no te van a comprometer en nada (...)", dijo el efectivo.

"Ahora la Diviac está cumpliendo otras tareas lejos de la investigación. Un sentimiento de frustración se ha apoderado de los policías que integraron el grupo porque tuvieron que capacitarse mucho y enfrentar amenazas para sacar adelante el caso", dice un detective de la PNP.

Los policías entrevistados creen que al desmantelamiento de la Diviac le seguirá una ronda de venganzas. "Lo siguiente que harán será revisar quiénes son los suboficiales que participaron en investigaciones del poder para mandarlos a otro lado. Para mí todo esto es una copia de lo que pasó con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", dice Colchado.

ingreso de 1xBet, una de las casas de apuestas más polémicas del mundo. Sus tres fundadores rusos enfrentaron una orden de arresto internacional por obtener más de 655 millones de dólares mediante juegos ilegales. Tiene prohibido operar en Rusia, fue suspendida en Reino Unido y afronta una denuncia penal en Marruecos.

Aun así, 1xBet obtuvo todos los permisos para operar en Perú. Su subsidiaria local, Terminus Platform Perú S.A.C., fue creada en enero de 2024 por Ariana Chacón Solano, de 22 años, y Romina Florian Chinchay, de 21.

La expansión de estas plataformas tiene un correlato en la salud pública. En 2024 los hospitales del país registraron 11,993 diagnósticos de ludopatía, una cifra inédita que crece a ritmo alarmante.

"A raíz de la pandemia, las apuestas pasaron a ser vía online. Se abrieron muchísimos casinos virtuales y casas de apuestas deportivas. En una escala del uno al nueve, diría que las atenciones de apostadores virtuales se han incrementado en un nueve. Han igualado a otras adicciones como el tabaco o el alcohol", explica Paula Vizcarra, psiquiatra especializada en adicciones del Hospital Edgardo Rebagliati.

La avalancha de plataformas ha inundado también la televisión y el internet con publicidad sin control. Programas de streaming, realidades, partidos de fútbol, torneos de videojuegos y medios de comunicación exhiben sin límites las marcas de apuestas.

"La publicidad hace mucho más fácil caer en la ludopatía. La prohibición de anuncios de tabaco fue clave en la lucha contra el cigarro. En cambio, aquí falta información y prevención, y en muchas regiones no existe un solo servicio especializado para recibir ayuda", añade Vizcarra.

El Perú, convertido en un casino digital sin reglas, avanza entre la adicción creciente y el lobby empresarial, mientras el pacto Congreso-Ejecutivo sigue sin definir si quiere recaudar y regular o simplemente mirar hacia otro lado.

Jiménez, tesorera de Fuerza Popular. Ambos aparecen en los reportes de Fuerza Popular con montos de S/ 10,560.

"Estas operaciones denotan una estrategia deliberada de ocultamiento, al evitar los canales bancarios y controles de la ONPE, generando así una opacidad estructural sobre la verdadera fuente de los fondos", concluye al respecto la fiscal Villar.

La Fiscalía ha descubierto que el movimiento de dinero no quedó recogido en ningún libro contable ni en cuentas bancarias. Desde Fuerza Popular adjugaron que los libros y la cuenta estaban requisados o embargados por el Equipo Especial Lava Jato. El 2 de diciembre del 2021, seis meses después de cerrada la campaña presidencial, Fuerza Popular recién mandó a hacer nuevos libros contables.

La fiscal Villar consultó a la ONPE sobre ese asunto y la respuesta fue que al fujimorismo nunca le interesó poner sus cuentas en orden y por eso han recibido una multa de 5 UIT (S/ 23,000) por no bancarizar sus ingresos y 16 UIT por no tener libros contables (S/ 73,600). La multa no causa mayor escozor en el partido. El dinero para pagarla sale del financiamiento público que recibe.

La investigación fiscal también pone en la mira a los medios de comunicación. Fuerza Popular consignó en los balances que entregó a la ONPE pagos por S/ 1'364,561 en publicidad electoral.

En la lista de los medios que dijo haber contratado están RPP, el holding radial CRP Medios y Entretenimientos y la empresa de publicidad Prime Time SAC. Las tres compañías, sin embargo, negaron haber recibido el dinero y señalaron que el fujimorismo todavía les debe la publicidad que les contrató.

Cuando fue interrogada, Keiko Fujimori optó por guardar silencio ante las preguntas de la Fiscalía. Así consta en el documento fiscal. El Tribunal Constitucional tendrá que hacer trabajo de ingeniería para volver a limpiarla. O de gasfitería.

yó también a la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, quien trabajaba en la acusación principal del caso contra el prófugo César Hinostroza y los miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Cárdenas, además, había sido la fiscal que descubrió que la tesis que la fiscal suprema Patricia Benavides presentó ante la JNJ en 2022 presentaba un 85 % de contenido plagiado. Hoy Benavides es una de las principales aliadas de Gálvez en la Junta de Fiscales Supremos.

El golpe fue doble: debilitó al equipo que lo investigaba y, a la vez, desactivó una acusación clave contra los jueces de "Los Cuellos Blancos".

El siguiente paso fue aún más ambicioso. Desde finales de octubre Gálvez ha impulsado una propuesta para eliminar todos los equipos especiales de la Fiscalía, incluidos los que investigan los casos Lava Jato, Corrupción del Poder y Muertes en las Protestas.

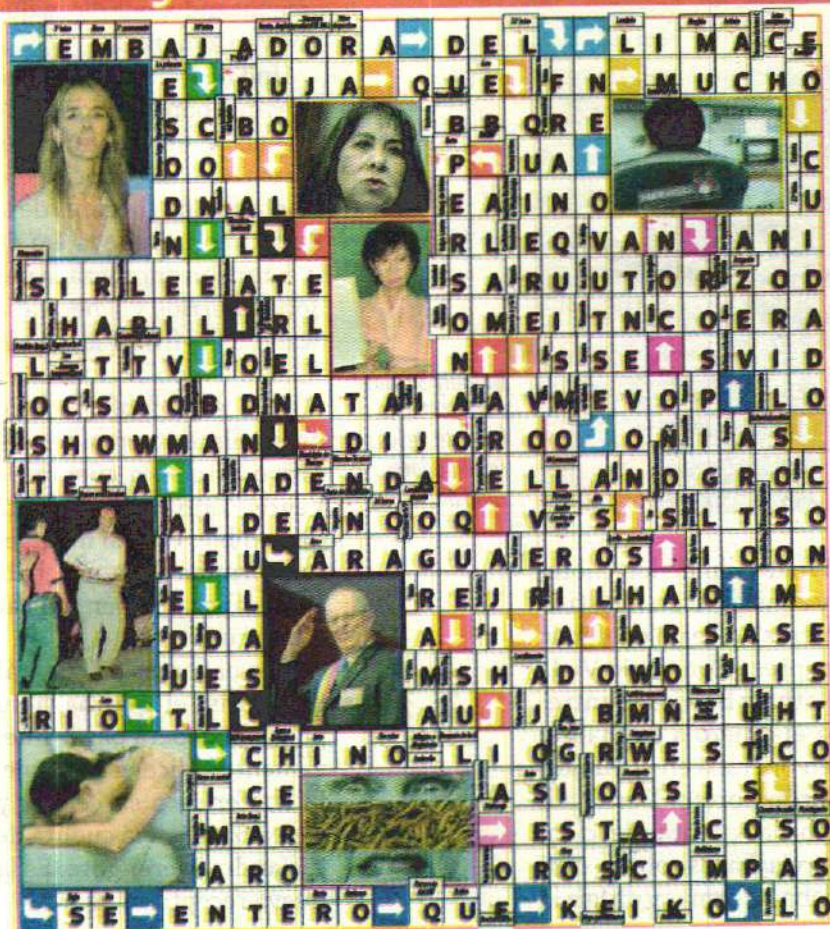
La medida, que ha quedado pendiente de discusión en la Junta de Fiscales Supremos, significaría el desmantelamiento de los equipos que investigan los casos más sensibles de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.

En ese camino, la Fiscalía de la Nación ha exigido a los coordinadores de dichos grupos que entreguen informes detallados sobre su personal y el costo operativo de cada uno de ellos, según documentos obtenidos por esta publicación. En apariencia, una medida administrativa. En la realidad, el paso previo a la desarticulación.

Para los líderes políticos enfrentados a las investigaciones de Odebrecht y Cuellos Blancos, la continuidad de Tomás Aladino Gálvez es garantía de estabilidad, sobre todo a cinco meses de las elecciones presidenciales de 2026.

Según fuentes judiciales, su presencia no sólo asegura la parálisis o la destrucción de las investigaciones sino que completa el proceso de captura del sistema de justicia: un Tribunal Constitucional, una Junta Nacional de Justicia y una Fiscalía que, por acción u omisión, responden a los mismos intereses.

Pendograma solución anterior N°757



Miss Corcho

► De cómo la tenacidad y las influencias llevaron a Lesly Shica al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

SONIA SUYÓN

Lesly Shica llegó al Midis recomendada por Patricia Li, la dueña de Somos Perú, y con la venia de César Acuña, el patrón de APP. La ministra favorita de José Jerí ha demostrado a lo largo de su corta pero variopinta carrera que no anda con chiquitas. La ambición por el poder y el figuretismo son su fuerte.

En el año 2020 la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social Lesly Shica se alistó en la escuela de Guerra del Ejército y se graduó como capitán de reserva. Ahí conoció a George Forsyth, reincidente candidato presidencial de Somos Perú, quien también siguió el mismo curso. Esa amistad resultó decisiva a la hora de ser elegida por José Jerí como la titular de la cartera destinada en teoría a velar por los más pobres y vulnerables del país. Todo apunta a que habría sido Forsyth quien le entregó el CV de Shica a Patricia Li, durante un almuerzo, justo un día antes de la juramentación del gabinete del presidente interino. Li publicó en sus redes sociales una fotografía de ese fructífero encuentro.

Hace sólo medio año atrás, Shica fue rechazada en un concurso como asesora en esa misma cartera. Pero ella ha vuelto por la puerta grande después de haber demandado dos veces al ministerio que ahora, gracias al somismo metastásico, ocupa.

En efecto, medio año atrás Lesly Shica recibió los resultados de su entrevista personal en un

concurso convocado por el Midis para ocupar el cargo de asesora en el Viceministerio de Prestaciones Sociales de esa cartera. No la felicitaban sino que le daban la ingrata noticia de que había sido descalificada para el puesto. Esas respuestas que con tanto aplomo había dado a los miembros del Comité Evaluador no habían convencido a nadie. Según los resultados de esa entrevista, se la consideró "muy por debajo de lo esperado" en cuanto a confianza y credibilidad en el ámbito técnico requerido para el puesto.

Ella pensó que era una injusticia. Fue así que decidió impugnar el resultado y denunciar en abril pasado al Midis ante el Tribunal del Servicio Civil (Servir).

"La calificación obtenida en la entrevista personal no guarda relación con el desempeño demostrado en la entrevista dada", señaló en su reclamo. Además, se quejó de que las preguntas que le habían hecho no coincidían con lo que se había anunciado en las bases del concurso. Por tal motivo y sin rodeos, planteó al Tribunal de Servir que se le declarara como ganadora y se le designara en el cargo al que había postulado.

Tras analizar el caso, unos meses después, en julio pasado, el Tribunal de Servir declaró infundado el recurso de apelación de Shica contra los resultados del concurso y ratificó la decisión de descalificarla para ocupar el cargo de asesora. Pero esa no fue la única vez que Shica denunció al Midis.



Lesly Shica Seguil ha sido gerente de Promperú, asesora de Fiorella Molinelli en EsSalud y colaboradora de Julio Demartini en el Midis cuando ocurrió la crisis de Qali Warma. Ahora es la ministra favorita de Jerí.

En el año 2018 entró a trabajar como asesora legal en ese ministerio, cuando la jefa del portafolio era Liliana La Rosa. En mayo de ese año Shica fue apartada del cargo. Ella denunció que se había cometido un atropello. Acusó a su jefa de entonces, la viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, de echarla sólo porque había opinado sobre una contratación indebida.

Shica denunció públicamente que su despido se debía a una represalia por haber opinado en el Portal Político.pe que las entidades de gobierno no deberían contratar a personas

sentenciadas por terrorismo. Ello a propósito de la contratación de la sentenciada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla en el despacho de la entonces congresista del Frente Amplio María Elena Foronda.

Después de ese episodio, Shica fue contratada en EsSalud y se volvió inseparable de Fiorella Molinelli.

Tiempo después volvería al Midis, esta vez de la mano de Julio Demartini, como su asesora, y también se volvió su sombra.

Cuando Demartini salió ante la ola de denuncias contra Qali Warma, y marchó al Mincetur, la

recomendó en Promperú, donde ocupó una de las gerencias operativas. Una persona que trabajó en esa época con ella contó a este semanario que se dedicó a hacer contrataciones excesivas y sin mayores resultados positivos en su gestión, por lo que sus superiores la invitaron a renunciar. Ella se resistió. Adujo que tenía el respaldo de Palacio y de los Acuña.

"La tuvieron que sacar prácticamente a la fuerza", dice la fuente.

Hoy el Midis es su cuartel general. Y está feliz. Forsyth es su capitán encubridor. Patricia Li, su mami simbólica. ■

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** ALEXANDRA AMPUERO **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com prensa@hildebrandtensustrece.com www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece
TWITTER: @ensustrece **IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA NOVIEMBRE 2025**